

Departamento de África

Coordinador: **Gladys Lechini de Alvarez**

- IR** Presentación
Por Gladys Lecchini
- IR** Marruecos y el 11-M: La actuación de Al Qaeda en el reino alauí y su proyección hacia España
Por Juan José Vagni
- IR** El Magreb frente a la Asociación Euromediterránea: Retos pendientes
Por Magdalena Carrancio
- IR** 10 años de democracia en Sudáfrica. Balance y perspectivas
Por Maria Gisela Pereyra Doval y Verónica Taulamet
- IR** A 10 años del genocidio en Rwanda
Por Diego Buffa
- IR** ¿Es posible la paz en Sudán?
Por María José Becerra

Presentación

Por **Gladys Lechini**

En este Informe correspondiente al año 2003 y parte del 2004, los miembros del Departamento Africa se han abocado al análisis de una serie de temáticas relevantes pero que no necesariamente exclusivas de este período. Como se ha mencionado en otras oportunidades, Africa no es un continente homogéneo. Sin embargo, tal como sucede en el espacio latinoamericano, existen ciertos procesos políticos y económicos que con diferentes matices, se suceden contemporáneamente a lo largo y a lo ancho del continente. En ese sentido merece anotarse el proceso de cambios operados en la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos en Africa que, a modo de introducción **Gladys Lechini** se ocupó de relevar en: "**Cambios en el Estado y la política en el Africa de la post guerra fría**"

Con respecto al **África del Norte**, **Juan José Vagni** focalizó sus comentarios nuevamente en Marruecos, en su trabajo sobre "**Marruecos y el 11-M**", pero esta vez colocando el énfasis en la interrelación entre los atentados en Casablanca, el 16 de mayo de 2003 y los atentados en Atocha, Madrid el 11 de marzo de 2004, los cuales han

complicado aún más las ya difíciles relaciones entre Marruecos y España. Por su parte, **Magdalena Carrancio** en “**El Magreb frente a la asociación euromediterránea: retos pendientes**” analiza, en el contexto del diálogo euromediterráneo iniciado en Barcelona en 1995, las complejas relaciones entre los miembros de la Unión Europea (UE) y los países del Magreb (Tunez, Argelia, Libia, Marruecos y Mauritania) así como las perspectivas para generar mejores vínculos.

En cuanto al **África Subsahariana**, el año 2004 muestra dos aniversarios, que de alguna manera explicitan dos corrientes de interpretación de los avances y retrocesos en esta región del mundo. Para los afro-optimistas el dato más relevante son los 10 años de democracia en una Sudáfrica multirracial y relativamente estable, tal como lo presentan **María Gisela Pereyra Doval** y **Verónica Taulamet** en “**10 años de Democracia en Sudáfrica: Balance y Perspectivas**”. En tanto los afropesimistas pueden recordar la masacre en Rwanda, bajo el análisis de **Diego Buffa**, en “**A diez años del genocidio en Rwanda**” y los retrocesos y estancamientos en un sangriento conflicto interno de larga data, cual es el caso de la guerra civil en Sudán, analizada por **Maria José Becerra** en “**¿Es posible la paz en Sudán?**”. Finalmente **Julieta Cortés** se ocupó de la **Cronología** de los principales acontecimientos ocurridos en este período.

Gladys Lechini

Coordinadora del Departamento de Africa

Cambios en el Estado y la política en el Africa de la post guerra fría

Por Gladys Lechini

La observación general de los estados del continente africano permite detectar un proceso de cambios operados en la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos desde un modelo particular, propio del período de la pos independencia y consolidación de los estados, hacia nuevos patrones que apuntan a una mayor apertura del sistema político y a la inclusión de nuevos actores en lo que se ha dado en llamar la transición democrática.

Estos cambios, de naturaleza multidimensional, han sido producto de una combinación de factores internos y externos y han afectado la estructura, contenido y dinámica del sistema político, en sus aspectos formales y procesos informales. La transición que se inició en los ochenta como resultante del proceso de modernización permite observar modificaciones en la política y el Estado. A esta situación se le sumó el fin de la guerra fría, que en el continente africano trajo consigo la aparición de una nueva y compleja red de realineamientos de fuerzas e intereses afectando los patrones políticos preexistentes, una vez perdida la posibilidad del chantaje Este-Oeste.

Como estos cambios no han sido lineales y presentan avances y retrocesos, han dando lugar a interpretaciones que toman en cuenta los aspectos positivos y otras, los negativos. Los afro-optimistas ponen el acento en los avances, y llegan a hablar de una segunda liberación de Africa o de un renacimiento africano. Los afropesimistas refieren a todos los problemas para conseguir la consolidación de democracias estables y el crecimiento económico.

Los cambios más relevantes en la política africana en los últimos años se refieren los avances en el proceso de democratización, con el resurgimiento de la competencia política y la búsqueda de gobernabilidad. De esta forma, pudieron surgir nuevos actores políticos y florecieron asociaciones civiles a nivel local, nacional, subregional y continental. Asimismo la desaparición del monopolio estatal en la propiedad de los medios de información, promovió el pluralismo político y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos, fomentando la participación popular. También en este período se puso fin a los últimos vestigios del colonialismo y del racismo institucionalizado en Africa, con hitos como la independencia de Zimbabwe en 1980 y las primeras elecciones multirraciales en Sudáfrica en 1994.

Asimismo y teniendo en cuenta el pasado autoritario de la mayoría de los países, se avanzó en torno a nuevas modalidades para resolver cuestiones relativas a la reconciliación nacional. El mayor experimento fue la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, cuyo ejemplo fue retomado en otros países, entre ellos Rwanda, por el legado del genocidio de 1994.

De este modo, en los 90, los cambios en los modos de pensar y hacer la política en Africa apuntaban a avanzar en las reformas para fortalecer la apertura democrática. En este contexto se realizaron esfuerzos para reformar las instituciones y promover la gobernabilidad. En una primera instancia se organizaron conferencias nacionales para modificar las constituciones, apuntando a promover el fin del partido único, la restauración del multipartidismo y la organización de elecciones multipartidarias, bajo supervisión externa. En muchos casos se avanzó con la adopción de reformas electorales, se pudo concretar la alternancia en el poder junto a la sucesión de elecciones, con una mayor participación de todos los actores políticos.

Paralelo al florecimiento de las aspiraciones democráticas se produjo un resurgimiento de la cooperación regional y de los esfuerzos por avanzar en los procesos de integración, promoviendo ahora el regionalismo abierto, con la idea – no nueva- de ir construyendo bloques hacia la unidad económica panafricana.

Junto a la recuperación del “ideal panafricano” se desarrollaron nuevos esfuerzos para fortalecer la gobernabilidad a nivel continental, a través de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, de las decisiones de la ahora difunta OUA de no permitir en sus órganos la participación de representantes de gobiernos no democráticos, con la intensificación de la promoción de mecanismos panafricanos para la resolución de conflictos y de instrumentos para el mantenimiento de la paz. El punto más interesante lo constituyó la transformación de la OUA en la Unión Africana, con un parlamento y un sistema judicial panafricano.

Pero, a la vez que se producían estos avances hacia una democracia pluralista, el Estado africano se vio sometido a tensiones de variado tipo, principalmente por los intentos de achicar el estado para dar cuenta de las reformas políticas planteadas por el Consenso de Washington y las instituciones financieras internacionales. La política post independencia en Africa giró en torno al rol central del Estado y del sector público, en lo que fue considerado el modelo de acumulación del Estado intervencionista. Sin embargo, en función de su relativamente pobre performance, el Estado africano ha sido calificado de “sobredesarrollado”, “prebendario”, “patrimonial/neopatrimonial”, “cleptocrático”, “sultanato”, “omnipotente pero escasamente omnipresente”, “criminal”, “amiguista”, “inestable”, “rentista”, “leviatán lisiado”. Como este modelo colapsó, se realizaron esfuerzos para reemplazarlo por un esquema basado en el libre mercado, que cambiaba las reglas de juego. Se suponía que surgiría una nueva clase media que lideraría la transición democrática.

Pero estos cambios se produjeron en un contexto caracterizado por una prolongada crisis económica frente a la cual los gobiernos africanos debieron, ya desde los 80, aplicar los programas de ajuste estructural dictados por el FMI, que no lograron luego de 20 años resolver los problemas, sino que más bien crearon nuevos, tales como la agudización de las crisis económicas por el ajuste mal realizado, la expansión del sector informal y la pérdida de autonomía política y de capacidades domésticas.

Con el fin de la guerra fría surgió triunfante el modelo de economía neoliberal y el sistema democrático como valor político, que fue “impuesto” como condicionalidad externa para cualquier tipo de negociación con los estados desarrollados. Este nuevo modelo trajo consigo un significativo debilitamiento del Estado africano –que aún no había podido consolidarse- gracias a una combinación de factores, pero principalmente por la agenda de reformas anti-estado promovidas por las instituciones financieras internacionales. De esta forma, se deslegitimó el Estado como actor en la economía política, se erosionaron sus capacidades, se promovió el drenaje de cerebros, se erosionó el sistema político y se redujo al Africa a la región más subgobernada del mundo. Las políticas para llenar los vacíos dejados por un estado en retirada están en el corazón de los cambios ocurridos que incluyen la emergencia de nuevos actores con proyectos competitivos/conflictivos.

El fin del conflicto Este-Oeste, los avances democráticos y la crisis del Estado coexistieron con la continuación de los conflictos, ahora preferentemente intraestatales, trayendo como consecuencia el generalizado recurso a la violencia y a las armas para manejar las crisis políticas domésticas. En el caso del conflicto de los Grandes Lagos, las interferencias de los vecinos en la ahora República Democrática del Congo y su posterior ocupación por los

ejércitos de varios países africanos, mostraron la ausencia de respeto al principio de la no ingerencia en los asuntos internos de los estados. Los conflictos armados de Liberia y Sierra Leone también erosionaron este principio y se necesitaron esfuerzos regionales para mantener la paz frente al inminente colapso de los gobiernos. Esto llevó a rediscutir el principio de no intervención en los asuntos internos en el caso de gobiernos involucrados en violaciones masivas a los derechos humanos.

Los conflictos más trágicos tuvieron dimensiones de genocidio o mostraron el colapso de la autoridad gubernamental central. Asimismo adquirieron nuevas características, pues no participaron sólo ejércitos profesionales, sino también civiles armados, con reclutamiento de niños-soldados, promoviendo el terror a través de las mutilaciones, sobre todo en las áreas rurales. Sin claridad ideológica o proyecto social alternativo, estas guerras han mostrado el surgimiento de una juventud urbana desinteresada.

Por su parte, las instituciones de Naciones Unidas comenzaron también a tener un rol creciente en la promoción de la gobernabilidad en los países que salían de los conflictos. El ejemplo más remarcable es la creación de tribunales internacionales para juzgar los crímenes de guerra, mostrando una fuerte señal a los actores políticos sobre la necesidad de respetar los derechos humanos y las reglas internacionales en situaciones de conflicto.

Otros cambios menos visibles, pero no menos importantes refieren al aspecto demográfico y al rol más prominente de las nuevas generaciones, pues en la actualidad los niños y jóvenes representan el 50% de la población africana. El voto de la juventud es hoy relevante, así como el hecho que una nueva generación de jóvenes está asumiendo una posición de liderazgo, reemplazando a los viejos líderes de la independencia. Estos jóvenes no han experimentado ni el gobierno colonial ni formaron parte de la lucha anticolonialista y de liberación. Pero paralelamente y lo que es más grave, se observa un desinterés de la juventud por la política y una alienación producto en general del desempleo, que en muchos casos los ha llevado a participar directamente en los conflictos internos armados.

También ha incidido fuertemente la rápida tasa de urbanización y las migraciones internas asociadas. Junto a la tradicional dicotomía rural-urbana han surgido nuevos problemas entre los "recién llegados" y los nativos, el reavivamiento de competencias étnico-regionales/socio-culturales, la proliferación de pandillas urbanas armadas, el crecimiento de la intolerancia y xenofobia especialmente hacia los "no nativos", planteando el problema de la inclusión social, la masiva expansión del sector informal y el crecimiento de nuevas religiosidades desde el sincretismo al puritanismo. Esto ha llevado al incremento de políticas contestatarias alrededor de cuestiones como la ciudadanía, los derechos individuales y grupales, el rol del Estado y la naturaleza de sus capacidades.

A pesar de muchas señales positivas la mayoría de los analistas sostienen que el desarrollo económico de Africa y la transición política del autoritarismo a la democracia han sido obstaculizados y obstruidos. Los afropesimistas no le encuentran salida. Los optimistas creen que las reformas están produciendo una nueva burguesía que liderará una transición genuina, buscando racionalidad en la economía y en la política. También hay polarización entre los afropesimistas y los optimistas con respecto al rol de la sociedad civil. Los primeros no creen en el surgimiento de una sociedad civil y los segundos dicen que hay un proceso de cambio gracias a los actores civiles que son los promotores de la transición democrática.

Por su parte, los datos estadísticos muestran cifras alarmantes y aunque no todos los estados africanos están en las mismas condiciones, la mayoría enfrentan una serie de

desafíos comunes. Alrededor del 40 % de la población del Africa al Sur del Sahara vive bajo la línea de pobreza, con menos de 1 dólar por día, afectada por el SIDA -el 70% de los casos de HIV están en Africa-, la malaria y otras enfermedades provenientes de aguas insalubres. La agricultura y la industria se han descapitalizado y la infraestructura degradado. Uno de cada 5 estados africanos está afectado por algún tipo de conflicto y el número de desplazados ronda los 14 millones.

Asimismo, el proceso de globalización los ha afectado negativamente. La participación del continente en la economía mundial ha ido en disminución en las ultimas tres décadas, experimentando una desaceleración de su crecimiento de 5% por año en 1973 a 1% para 2002. La participación en el comercio mundial también ha decrecido y la mayoría de los estados se mantienen como exportadores de una reducida gama de productos. Alrededor del 40% de la riqueza privada está depositada en el exterior, así como los recursos humanos, con un drenaje de cerebros aumentando cada vez más.

A pesar de los constreñimientos económicos externos y las dificultades internas, el renacimiento africano está en manos de los propios africanos y será posible a través de una voluntad política que apunte a consolidar los aspectos positivos de los cambios y a sumar capacidades para tener más poder en las negociaciones internacionales.

Los gobiernos deben romper el ciclo vicioso del subdesarrollo, para resolver la pobreza y la violencia expresada en diferencias étnicas o religiosas. La democracia y el respeto a los derechos humanos son condiciones esenciales para reducir el conflicto. El Estado colapsado debe ser fortalecido bajo nuevas reglas de juego democráticas y transparentes, con gobiernos responsables y atentos a las necesidades sociales. Africa posee riquezas económicas y "riqueza humana", pero los tiempos cada vez son más cortos para que los líderes políticos tomen las decisiones apropiadas en pos del interés nacional de sus pueblos.

Departamento de Africa

Aporte Especial

Marruecos y el 11-M: La actuación de Al Qaeda en el reino alauí y su proyección hacia España

Por **Juan José Vagni**

Los atentados de Madrid abrieron un nuevo panorama en torno a la situación interna de Marruecos, al papel de la monarquía y sobre todo a la presencia de células de Al Qaeda en el país, al tiempo que agregan un ingrediente "caliente" en las ya difíciles relaciones con España. Durante mucho tiempo se sostuvo en medios políticos y académicos que el país norteafricano era una *rara avis* del entorno arabo-musulmán: se creía que estaba a salvo de cualquier tentación islamista radical a través del liderazgo religioso del rey como "comendador de los creyentes".

Pero los sucesos de Atocha han desbaratado esta imagen demasiado optimista del reino jerifiano. La participación de células locales de Al Qaeda ha demostrado, ahora con pruebas objetivas, que esa mirada inocente sobre Marruecos era totalmente falaz. Las últimas investigaciones señalan que 40 de los 61 presuntos autores y colaboradores de la matanza del 11-M son marroquíes. La pista más sólida indica como autores materiales a una formación denominada Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), vinculada también a los atentados de Casablanca perpetrados el 16 de mayo de 2003. Según fuentes de la policía española que investiga la masacre de Atocha, puede haber de 300 a 400 simpatizantes de este grupo en la península.

"Éste ha sido un atentado político, que las hipótesis más plausibles, ponen en relación con la intervención española en la guerra de ocupación en Irak. Y por qué no, también por la desafección mostrada por el Gobierno hacia el mundo árabe", en palabras de Bernabé López García, catedrático de Historia del Islam en la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los principales analistas de Marruecos. Y agrega: "Por ello el atentado del 11 de marzo debe ser interpretado en clave transnacional, y las pistas descubiertas hasta el momento llevan a la red Al Qaeda. (...) Pero, precisamente, el perfil que se va dibujando de algunas personas presuntamente implicadas, nos hace pensar en que tampoco pueden desconocerse otras claves más locales que, a nadie puede ocultarse, llevan a preguntarse por la gestión realizada en los últimos años de la inmigración y yo diría también que de las relaciones con nuestro vecino del sur".¹

Aunque después del atentado, y con la asunción del nuevo gobierno socialista en España, se haya querido bajar los decibeles afirmando que la relación entre ambos países está intacta², lo cierto es que en el imaginario colectivo español (especialmente en ciertos sectores de la ultra-derecha) el fantasma del "moro" lamentablemente parece renacer.

¹ Bernabé López García, *España-Marruecos: Hipótesis, exégesis y certezas*, en www.mundoarabe.org

² En el Discurso del Trono de este año, Mohammed VI señaló su compromiso para unas relaciones productivas con España, al tiempo que se anunciaba la posible formación de una fuerza conjunta marroquí-española en el contingente de paz hacia Haití.

Un ataque inesperado

La mañana del 11 de marzo quedará en la memoria colectiva de los españoles como uno de los momentos más trágicos de su historia reciente. El ataque coordinado con explosivos a cuatro líneas de trenes provocando casi 200 muertos y más de 1.400 heridos –entre ellos ciudadanos marroquíes–, parecía desde un principio mano de obra de Al Qaeda, pero desde fuentes oficiales se insistía en la responsabilidad de los comandos terroristas de ETA.

Hasta ese momento, para Europa y el mundo occidental, el terrorismo de corte islamista era un asunto que sólo concernía a Estados Unidos y no “entraba” en su marco de referencia la posibilidad de un ataque de esta naturaleza.

El 11-M constituye no sólo el primer atentado en gran escala de Al Qaeda en España, sino también en Europa. Pero existen casos anteriores protagonizados por otros grupos islamistas, como el atentado contra el restaurante El Descanso en una localidad cercana a Madrid y a la base norteamericana de Torrejón, el 12 de abril de 1985, provocando 18 muertos y un centenar de heridos. Este asalto fue reivindicado por una agrupación denominada Yihad Islámica y nunca fue esclarecido.

En el marco europeo, después de los acciones de comandos palestinos durante las décadas del 60 y 70 (a las que no se podría calificar de corte islamista), Francia tuvo una seguidilla de atentados y de intentos fallidos entre 1994 y 1996 realizados por el Grupo Islámico Armado (GIA) de origen argelino, que incluyó el secuestro del Airbus de Air France en el aeropuerto de Argel en diciembre de 1994 con la intención de estrellarlo sobre París.

La pista marroquí

Tanto Marruecos como España subestimaron la posibilidad de un atentado terrorista en su propia tierra. El reino alauí, por ser un país musulmán cuya monarquía ostenta un plus de legitimidad religiosa, a través de su entronque con la familia del propio Profeta Mahoma. En el caso de España, por su papel secundario –por lo menos hasta la guerra de Irak– en los conflictos que atraviesan el mundo islámico y Occidente.³

No obstante, diversos informes de la Policía, la Guardia Civil y los servicios de espionaje españoles alertaban sobre la posibilidad de un ataque de ese estilo. Varios años antes del 11-M, los servicios de inteligencia recomendaron una mayor lucha contra las bandas de narcotraficantes en Ceuta, “debido al apoyo que los mismos prestan a las referidas actividades radicales”⁴. Estos informes señalaban a las dos ciudades españolas en el norte de África –Ceuta y Melilla– como “focos de cultivo del terrorismo islamista”, por el

³ Para el investigador Domingo del Pino, las advertencias de Marruecos sobre la imprevisión española pudo haber guardado una motivación estratégica muy importante. En ese sentido señala: “Marruecos, además, pudo dar la impresión con sus advertencias de que intentaba llamar la atención tanto sobre la necesidad, entonces y ahora reivindicada, de ser incorporado al control militar y policial del Estrecho de Gibraltar, y paralelamente de alertar, no siempre con credibilidad, sobre la posibilidad de que los confines del Sáhara se convirtieran en base alternativa a Afganistán de Al Qaeda, lo que subliminalmente reforzaba su reivindicación de la soberanía definitiva sobre el Sáhara Occidental”.

⁴ Diario El País, domingo 18 de julio de 2004.

crecimiento incontrolado de mezquitas –donde se llama constantemente a la yihad- y por los evidentes vínculos “entre traficantes de hachís e integristas”.⁵

Dos días después de los atentados de Madrid fueron detenidos los marroquíes Jamal Zugam, Mohamed Chaui y Mohamed Bekkali, algunos de los presuntos autores de la masacre. Mientras tanto, a través de la prensa, ambos países comenzaron a culparse mutuamente por la imprevisión ante los atentados.

Jamal Zougam era el propietario del locutorio donde se manipularon los teléfonos celulares que actuaron como sistema de detonación para las 13 mochilas-bomba que provocaron la masacre. El marroquí ya había estado en el punto de mira por su presunta relación con el terrorismo islámico en julio de 2001, cuando el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón⁶, había ordenado registrar su domicilio madrileño, donde se encontraron números de teléfono de implicados en la célula de Abu Dahdah y vídeos de la Yihad Islámica. Pero Zugam fue puesto en libertad entonces por falta de pruebas suficientes.

Además, el nombre de Zugam apareció también en un sumario abierto en Francia contra las “redes afganas” de Al Qaeda, por haber mantenido contacto en Madrid con uno de los supuestos miembros de estas redes. También habría estado relacionado con terroristas del frente checheno, como Omar Dhagayes o los hermanos Benyaich.

En los días posteriores al atentado, los investigadores comenzaron a encontrar importantes conexiones entre los detenidos y el atentado perpetrado en Casablanca en el mes de mayo del 2003.

⁵ Según el Diario El País, “Pese a su proximidad geográfica con Marruecos, (Ceuta y Melilla) no cuentan con un solo especialista en terrorismo islamista en las plantillas de las Fuerzas de Seguridad del Estado, según reconocen los mandos consultados. Todos sus agentes son generalistas, y los espías del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) destacados en la zona se han dedicado más a investigar las actitudes anexionistas marroquíes que a detectar células fundamentalistas.

Desde el año 2000, la Delegación del Gobierno en Ceuta, al frente de la cual estaba Luis Moro, y diversos servicios de información elevaron al Gobierno informes en los que advertían del riesgo de que el integrismo marroquí contagiara a sectores musulmanes de esa ciudad, denunciaron la presunta vinculación de líderes de asociaciones religiosas con el narcotráfico y dejaron constancia de la proliferación de mezquitas sin control. También reclamaron mayores dotaciones policiales así como integrar en la sociedad a los sectores musulmanes más marginales, para evitar que sean caldo de cultivo de grupos integristas”.

⁶ Según el Diario La Vanguardia: “Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, al menos 63 personas fueron detenidas en España acusadas de ser presuntos integrantes de Al-Qaeda en la península, cuyo territorio sirvió de base de operaciones de esa red terrorista, según los investigadores.

De esos 63, unos 20 permanecen encarcelados, en el marco de una causa que instruye el juez Garzón titulada Operación Dátil, según indicaron anteayer fuentes del servicio penitenciario.

Ben Laden figuraba en esa causa desde 1996, explicó Garzón a mediados de febrero, ratificando que ya entonces él había advertido del peligro de ese terrorismo integrista.

A mediados de septiembre pasado Garzón acusó a 33 personas de “pertenecer a la organización terrorista Al Qaeda”, diez de ellas por los atentados de 2001. Entre ellos figura Ben Laden, contra quien Garzón dictó una orden de captura internacional junto a otros doce supuestos activistas huidos.

Miembros de la célula española de Al-Qaeda habrían participado en la preparación de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos, durante una estadia en España del 7 al 19 de julio de 2001 de Mohammed Atta, presentado por Washington como el jefe del grupo de piratas aéreos que se estrellaron contra las Torres Gemelas, según fuentes judiciales españolas”.

Se comprobó que Zougam había estado en Marruecos antes de que fueran perpetrados los atentados de Casablanca y salió de ese país en abril de 2003 y que había vivido en España con Abdelaziz Benyaich, inculpado por su pertenencia a la célula de Al Qaeda que fue desmantelada en España en 2001 y hermano de Salahedin Benyaich, detenido por su supuesta implicación en los atentados de Casablanca.

Además, otro de los detenidos del 13 de marzo, Mohamed Chaui, apareció en las escuchas de conversaciones realizadas a una célula española de Al Qaeda que pudo haber participado en la preparación de los atentados del 11-S, según Jean-Charles Brisard, investigador privado contratado por los abogados de las familias de víctimas de ese masacre.

Para Mohamed Darif, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Hassan II de Mohamedia y uno de los mayores expertos sobre islamismo marroquí, "no hay duda ni del vínculo entre los atentados de Casablanca y los de Madrid, de la responsabilidad del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, ni de la responsabilidad intelectual de Al Qaeda". Según Darif, "los marroquíes son los ejecutores", porque "en Al Qaeda no se confía en sus capacidades de planificación".⁷

Casablanca, el debut de Al Qaeda en Marruecos

El 16 de mayo de 2003 cinco ataques suicidas sincronizados causaron 46 muertos y más de 100 heridos en Casablanca. Los atentados tuvieron lugar en el restaurante de la Casa de España, la Alianza Israelita, el Hotel Safir Farah, un restaurante italiano junto al Consulado de Bélgica y un antiguo cementerio judío. En el ataque a la Casa de España murieron una veintena de personas, ciudadanos españoles, marroquíes y otros europeos y se puede señalar como el primer ataque de una célula de Al Qaeda contra objetivos españoles.

Los terroristas suicidas eran jóvenes pobres y de escasa instrucción que provenían de uno de los barrios más indigentes de la ciudad de Casablanca, en cambio sus líderes y cómplices provenían de ámbitos más acomodados.

Esta actuación repetía el esquema de los ataques realizados cuatro días antes en Riad, Arabia Saudí. Ambas acciones fueron percibidas como una respuesta de Al Qaeda a la ocupación de Irak, que se había producido unas semanas antes.

En España la lectura de las autoridades fue demasiado inocente, la hipótesis principal sostenía que "se trataba de un ataque contra un lugar frecuentado por la clase media marroquí en el que se servía alcohol"⁸, descartando así cualquier interés contra objetivos españoles o vinculándolo con la presencia de tropas en Irak. "Los recientes atentados de Madrid confirman que el mensaje no fue bien descodificado y que las medidas adoptadas en materia de seguridad no fueron suficientes ante la transformación de España en objetivo de Al Qaeda tal y como subrayaban informes como el elaborado por la Guardia Civil en junio de 2003", explica Miguel Hernando de Larramendi.⁹

Pero existen también otros antecedentes que vale la pena señalar para reconocer la presencia creciente de organizaciones islamistas radicales en el reino alauita que tenían a

⁷ Diario El País, mayo de 2004.

⁸ Miguel Hernando de Larramendi, *Las Relaciones con Marruecos tras los atentados del 11 de marzo*, Real Instituto Elcano, abril de 2004.

⁹ Idem.

España en la mira de sus acciones. En primer lugar, el ataque contra el Hotel Atlas Asni de Marrakech en 1994, donde murieron dos turistas españoles y en el que se responsabilizó al régimen argelino y además, la detención en Marruecos de activistas de la red Salafiya Yihadia (*ver abajo*) vinculados a Al Qaeda, evitando así una serie de atentados previstos en el estrecho de Gibraltar durante la operación militar Active Endeavour –donde participan buques occidentales- y en diversas ciudades marroquíes. Aún bajo estas circunstancias, las cancillerías occidentales seguían sosteniendo que Marruecos era inmune al islamismo radical.

El ataque del 16 de mayo constituyó entonces el debut en tierras marroquíes del extremismo islamista, demostrando una vez más la vulnerabilidad del régimen.

Según Mohamed Tozi, “se compara con frecuencia los efectos del 16 de mayo en Marruecos con los del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y en el mundo. La cadena de confianza en que se fundaba la sociedad se había roto irremediablemente lo que no ha dejado de suscitar varias cuestiones sobre la capacidad de la monarquía para gestionar el riesgo islamista y garantizar el proyecto de transición política”.¹⁰

Luego de los atentados, la monarquía marroquí preparó una dura respuesta, apuntando en diversas direcciones. En primer lugar, las autoridades señalaron como autores del ataque al grupo islamista Assirat al Moustakim (la Recta Vía), en un acelerado operativo que permitió la detención de algunos terroristas que no habían logrado detonar sus explosivos. El líder de ese grupo murió bajo arresto en circunstancias sospechosas, dejando fuertes indicios de manipulación política en torno al asunto.

El proceso judicial terminó con severas condenas, incluida la pena de muerte para tres jóvenes miembros del grupo terrorista y para un activista de la Salafiya Yihadia.

Los servicios de seguridad marroquíes aseguran que el autor intelectual es Mohamed Al Zarqawi, alias Abu Musab, lugarteniente de Osama Bin Laden para Europa, el norte de África y Oriente Medio. Entre los ejecutores de sus órdenes estaban Amer Azizi, Karim Mayati, Saad el Hussein y los hermanos Benyaich, todos ellos presuntamente vinculados con los atentados del 11-M en Madrid.

Según Abdalá Saaf, ex Ministro de Educación y director de la única institución marroquí que se ocupa de cuestiones estratégicas, “la ejecución del plan debía ser obra del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, que a su vez subcontrató, para los atentados de Casablanca, a diferentes grupos terroristas en Marruecos, afiliados al «consorcio» de la Salafiya Yihadia”. El mismo argumento sostiene el profesor Mohamed Darif, para quien Abu Musab suministró, en nombre de Al Qaeda, a los salafistas marroquíes el apoyo logístico y fijó los objetivos terroristas. El GICM se encargó de organizarlos sobre el terreno y de reclutar la mano de obra con la misión de ejecutar la matanza.

Antiterrorismo y represión interna

Inmediatamente después de los atentados de Casablanca, la aprobación acelerada de una ley antiterrorista –homóloga de la Patriotic Act de Estados Unidos después del 11-S– permitió al gobierno marroquí la intensificación de la represión no sólo contra militantes islamistas sino también contra periodistas y activistas de los derechos humanos. Las

¹⁰ Mohamed Tozy, *El fin de la excepción marroquí - El islamismo de Marruecos frente al reto del salafismo*. Cidob. (en línea)

medidas afectaron también al islamismo no violento, como Justicia y Caridad y el Partido de la Justicia y el Desarrollo.

Se calcula que hubo unas siete mil detenciones, pero el gobierno sólo reconoce dos mil como procesadas por terrorismo. También se produjeron 17 condenas a muerte y muchas a cadena perpetua.

Para diversos analistas, los atentados de Casablanca fueron la excusa perfecta que tuvo el régimen marroquí para “ segar la hierba ” interna. Sin duda que todo este proceso de represión generalizada rememoró en los ciudadanos los viejos tiempos de Hassán II y deterioró la imagen de apertura que el nuevo monarca intentaba proyectar.

Los diversos rostros del islamismo en Marruecos

Para Mohamed Tozi es necesario distinguir **tres fenómenos particulares** en el islamismo marroquí:

- 1) La **instrumentalización del aparato religioso** realizada por el rey Hassán II, colocándolo en el “centro del dispositivo institucional” y defendiendo una versión conservadora del Islam.¹¹
- 2) Los **movimientos islamistas** –expresados en muchos casos a través de partidos políticos como Justicia y Caridad y el Partido de la Justicia y el Desarrollo¹² - que basan su accionar en la toma del poder y la reforma del Estado. En este campo se mueven aquellos sectores sociales fruto de la escolarización y urbanización masiva, que si bien cuentan con un buen nivel cultural –intelectuales, universitarios, profesionales-, sus expectativas se ven limitadas y fracturadas por el actual sistema.
- 3) El movimiento salafiya, enlazado con la expansión cultural del wahabismo saudí y la dinámica internacional de la yihad (guerra santa).¹³

¹¹ Según Domingo del Pino, en el artículo *Por una nueva política exterior hacia el Magreb* del Real Instituto Elcano, “Hassan II propició la reislamización de la sociedad primero para combatir en nacionalismo que le cuestionaba el monopolio de la legitimidad política, y luego contra la izquierda nacionalista. En tiempos más recientes el islamismo, moderado y radical, se ha extendido de forma autónoma por todo el país y ahora cuestiona no sólo el monopolio de la legitimidad política sino el de la legitimidad religiosa de la institución mon

¹² Justicia y Caridad es la fuerza islamista con más respaldo dentro de la sociedad marroquí. Dirigida por el legendario jeque Yasin, cuestiona la legitimidad religiosa del rey y enfrenta a las elites políticas por “ateas, perversas y tiranas”. Aunque es el principal grupo de oposición, se niega participar en las elecciones porque las considera “arregladas” por la monarquía. Justicia y Caridad aboga por una modificación de la Constitución que limite los poderes absolutistas del rey. Además, rechaza el empleo de la violencia y es extremadamente crítico con Bin Laden y Al Qaeda.

El Partido de la Justicia y el Desarrollo es una agrupación más pragmática, dirigida por Abd al-Allah Benkirane. Es la única formación islamista que acepta la legitimidad religiosa de la monarquía marroquí y participa en el juego político. En las elecciones legislativas de 2002 alcanzó 42 escaños en el Parlamento, consagrándose como la tercera fuerza política del país. Su tono moralizante busca preservar a Marruecos de la occidentalización, conservando su identidad musulmana. Para este grupo, los verdaderos enemigos de Marruecos son “el analfabetismo, la pobreza y la decadencia de los valores morales”.

¹³ Para entender las nociones de salafismo y wahabismo, conviene traer a la memoria una síntesis de Juan Avilés: “El término salafismo está lejos de ser unívoco. En primer término, designa una escuela de pensamiento surgida en la segunda mitad del XIX, que en respuesta al desafío de la cultura occidental, preconizó el retorno a la tradición de los “píos antepasados” (salaf), es decir

Como veremos, aunque fenómenos particulares, estos tres sectores se han alimentado mutuamente, lo que contribuye a percibirlos como una unidad indiferenciada, confusa e inabarcable. Esta "aparente unidad" le deja el terreno libre a la monarquía para atacar al islamismo político (el segundo factor), bajo el discurso de preservar el "avance islamista radical". Pero en verdad, los partidos islamistas fueron los primeros en expresar su condena luego de los atentados. Por eso, según Tozi, "los movimientos del islam político rechazan la amalgama y temen que esos acontecimientos sean instrumentalizados para evacuarlos del campo político".¹⁴

La huella del salafismo

Hasta mediados de los años 70, la presencia del salafismo en Marruecos era marginal y de origen netamente local, caracterizada por una forma de "pietismo apolítico"¹⁵, pero esta red de aprendizaje del Corán tendrá una transformación sustancial cuando Arabia Saudí afiance su objetivo de difundir su visión del Islam, de corte wahabí.

Por motivos políticos y financieros (apoyo saudita en el conflicto saharauí, etc.), Marruecos permitió a personalidades saudíes financiar la construcción de alrededor de 35.000 mezquitas en todo el país. "Las autoridades marroquíes también son culpables de fomentar la intolerancia religiosa institucionalizada y ofrecer todo tipo de facilidades para la importación de la variedad más literal, rigurosa e inflexible del Islam (el wahabismo saudí)"¹⁶, sostiene Abdeslam Maghraoui, Profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Princeton.

Esta red de mezquitas y escuelas coránicas, que en un principio se limitaba a actividades piadosas y de formación, será el marco de referencia para nuevas estructuras contestatarias.

"En torno a cada mezquita se empezaron a formar redes de misioneros dirigidos por emires, invocando a los musulmanes a unirse a la yihad en el extranjero (Afganistán, Bosnia o Chechenia)", invocando el principio de *al-amr bil-ma'ruf wa-nahyu 'ani al-munkar* (imponer lo correcto y prohibir lo censurable) en su propio país".¹⁷ Esta acción proselitista incluía también la distribución de panfletos, casetes, CDs y videos, tanto en el país como hacia los magrebíes residentes en Europa.

También es habitual que los miembros de estos grupos participen en extensos cursos dictados en Arabia Saudí o que sean adoctrinados por las grandes figuras del salafismo internacional.

Mahoma y sus compañeros. Esta doctrina no era en su origen necesariamente contraria a todas las ideas occidentales, ya que la vuelta a los orígenes implicaba una ruptura con siglos de historia islámica y hacía posible compatibilizar ciertos aspectos de la modernidad con la supuesta edad de oro del Islam primigenio. Y era menos intolerante que otra corriente doctrinalmente similar, el wahhabismo, fundada en la península Arábiga por el predicador del siglo XVIII Muhammad ibn Abd al Wahhab y asumida por la casa de Saud, lo que a comienzos del siglo XX la convirtió en la doctrina oficial del reino de Arabia Saudí. Pero a partir de los años setenta ambas corrientes terminarían por confluir".

¹⁴ Tozi, op. cit.

¹⁵ Idem.

¹⁶ Abdeslam Marghraoui, *Tras la conexión terrorista marroquí: políticas estatales y wahabismo saudí*, abril de 2004, Real Instituto Elcano

¹⁷ Ibidem. Pág. 2.

Pero existe un nivel más marginal aún, donde se ubican un conjunto de grupúsculos violentos que se nutren del pensamiento wahabí pero que han derivado al bandolerismo y a los crímenes comunes. Al amparo de la yihad, pretenden purificar a la sociedad y castigar a los impíos, su presencia es muy notable en las ciudades de Casablanca, Salé, Tánger, Tetuán, Nador y Mequinez. Están organizados en células de tres a cinco personas, dirigidas por un emir. El gobierno marroquí subestimó a esta vertiente, considerándola sólo como un movimiento apolítico, aunque la utilizó como un medio para restar credibilidad a los islamistas más populares de los partidos Justicia y Beneficencia y Justicia y Desarrollo.

De nombres y organizaciones

Internarse en el mar del islamismo radical marroquí parece en principio una tarea difícil. Los informes de inteligencia aún hablan de "nebulosa" o "tendencia", ante la imposibilidad de poder definir a estas agrupaciones bajo los patrones del terrorismo conocido y coinciden en cuanto que "los datos de que se dispone sobre su estructura organizativa y sus vinculaciones con la red global de Al Qaeda siguen siendo sin embargo confusos".¹⁸

Frente a este complejo panorama, abundan las previsiones y las recomendaciones de cautela: "Es importante no dejarse confundir por la variedad de denominaciones. Todo indica que la red yihadista no forma una estructura jerárquica, ni a nivel global ni en el caso de Marruecos. Estamos más bien ante una nebulosa de grupos conectados entre sí de manera laxa, pero unidos por una misma ideología, que se difunde a través de los contactos personales, los sitios de internet, las cintas audiovisuales y la propaganda escrita".¹⁹

En el mismo sentido se expresa el profesor Mohamed Tozi: "el poder tiene ante sí una nebulosa que no corresponde a ninguna forma de organización conocida. No existe ningún lazo orgánico entre los *chiuks* que destilan sus *fatwas* (disposiciones morales) en la web, ni entre los imanes de las mezquitas en prisión y los jóvenes sin escolarizar de las chabolas, dispuestos a hacerse explotar delante de objetivos aproximados."²⁰

En resumen, es posible reconocer tres grandes formaciones o más bien "campos de acción" del yihadismo marroquí, de los que todavía se desconoce su verdadera estructura o naturaleza. Cada una de estas denominaciones aparecen de modo recurrente, unas veces de forma independiente, otras actuando como células locales de Al Qaeda, por lo que es difícil precisar si han actuado por iniciativa propia o con el estímulo de una red mayor.²¹

¹⁸ Juan Avilés, Balance del Terrorismo en el mundo en el año 2003, Cap. II: Oriente Medio y el Magreb, GEES.

¹⁹ Idem.

²⁰ Tozi, op. cit.

²¹ Por lo general, la estructura de las organizaciones locales de Al Qaeda se basa en el liderazgo de un emir y unos comités especializados: de la Choura (consejo), Seguridad, Militar, de Información y de Relaciones Públicas. Muchos adoptan en sus bases el sistema de células independientes, de modo que no se conocen entre sí y no se pueden vincular unas con otras, al tiempo que los militantes de una célula desconocen su pertenencia a una red más amplia. Estas formas de ocultamiento se complementa con el ahorro de fuerzas, al reclutar activistas en grupos preexistentes. Todo esto hace que se tornen verdaderamente "inasibles".

Salafiya Yihadia: una especie de movimiento que engloba a yihadistas marroquíes, entre los que destacan los veteranos de Afganistán. Es un sector minoritario de la gran corriente salafista, que auspiciando el retorno a la pureza original del Islam, ha optado por la lucha armada.

Harakat al Islamiya al Mokatila al Magribi (Grupo Islámico Combatiente Marroquí). Esta agrupación nació en los noventa de la mano de marroquíes que habían luchado en Afganistán. Desde finales del 2002 aparece en la lista de grupos terroristas del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde se lo señala como partidario del establecimiento de un "estado islamista en Marruecos" y como "colaborador" de Al Qaeda. Su principal dirigente es Abdelkarim Mejjati, de 36 años, que según la policía marroquí podría haber estado en Madrid hasta pocos días antes de los atentados del 11-M. Los servicios de inteligencia europeos sostienen que el Grupo se financia con donaciones y colectas de sus redes "civiles" en Europa y con dineros que vienen directamente de Al Qaeda. El vínculo entre ambas organizaciones es aparentemente muy fuerte: varios integrantes del GICM fueron entrenados en los campos de Al Qaeda y además, nueve presuntos miembros, todos de origen marroquí, fueron detenidos por las tropas de Estados Unidos en Afganistán y se encuentran encarcelados en Guantánamo.

Assirat al Moustakim (la Recta Vía). Es el grupo que supuestamente ejecutó los atentados de Casablanca, dentro de la esfera de la Salafiya Yihadia.

En el caso del 11-M algunos informes lo atribuyen al Grupo Islámico Combatiente Marroquí mientras que otros hacen referencia al grupúsculo Al Ussuud Al Khalidine ("Los Leones Eternos"), en ambos casos se trataría de terrorismo de franquicia en el marco de la red Salafiya Yihadia.

España-Marruecos ¿vuelta al Partenariado?

Después de los atentados del 11-M y pese a las acusaciones cruzadas, las autoridades marroquíes ofrecieron a su vecino la colaboración de sus servicios de seguridad, marcando las posibles conexiones con los atentados de Casablanca. El incremento de la cooperación fue acompañado por una serie de gestos simbólicos hacia las víctimas, previendo quizás las consecuencias que estos sucesos podría tener sobre sus inmigrantes en España.

En ese sentido los dirigentes de los principales partidos políticos marroquíes participaron en una manifestación de apoyo frente a la Embajada de España, se realizó una ceremonia ecuménica en la catedral de Rabat y el hermano del rey, Mulay Rachid, asistió a los funerales de Estado en Madrid. También se organizó el viaje del "Tren de la Vida", que transportó a familiares de las víctimas de los atentados de Casablanca hacia la estación de Atocha.

Estas expresiones de solidaridad, en el marco de una transición política bastante atípica en España, configuraron un nuevo marco para las relaciones mutuas. La visita de José Luis Rodríguez Zapatero a Rabat a tan sólo dos días después de asumir –siguiendo así una tradición instaurada por los anteriores gobiernos socialistas- constituye un signo inequívoco de esta disposición.

Para el nuevo gobierno, "reconstituir unas relaciones saneadas con el Reino de Marruecos"²² se transformó en una prioridad esencial de su política exterior. De este modo, los socialistas vuelven a la "teoría del colchón de intereses" o "partenariado", ese

²² España en el mundo (Plataforma de Política exterior del Partido Socialista Obrero Español).

entramado de lazos e intereses estables que amortiguarían las coyunturas políticas temporarias, preservando las relaciones de convivencia de ambos países.

Durante el gobierno de José María Aznar estas relaciones transitaron por sendas difíciles, desde el conflicto por el Islote del Perejil –con retirada de embajadores incluido-, hasta las cuestiones de inmigración, pesca off-shore y Sahara. Para Bernabé López García, con estos inconvenientes ambos países “estaban sembrando así un recelo entre pueblos que algunos elementos, desde la distancia o la cercanía, han podido o querido explotar”²³. Sin duda éste no era el clima propicio para una colaboración efectiva entre servicios de inteligencia y policías de los dos países, y unas relaciones institucionales de buena vecindad y colaboración, que hubieran contribuido, después de los atentados de Casablanca, a una mejor prevención.

En España existen alrededor de 350.000 inmigrantes de origen marroquí, siendo la minoría extranjera más importante y con un notable crecimiento demográfico. En el imaginario español, la asociación de este colectivo con la inmigración ilegal, la delincuencia y el tráfico de drogas, son habituales. En el camino, hay siglos de desencuentro con el *moro del otro lado*. “...Es necesario, más que nunca, una política de integración de la inmigración para evitar su discriminación, guetización y marginación, ya que es ahí donde se fomenta el resentimiento, que puede llegar a comunitarizarse. Y en casos muy, muy extremos a transformarse en odio y desprecio”²⁴, asegura Bernabé López García.

Para el profesor Javier Jordán de la Universidad de Granada, “la posible vinculación con el entramado de la yihad global, la percepción mutua puede verse seriamente dañada”.²⁵ Además asevera: “los efectos de los atentados pueden perjudicar gravemente la presunción de inocencia de muchos de ellos (inmigrantes marroquíes y otros musulmanes). La generalización del pánico, la desconfianza mutua y el rechazo recíproco pueden convertirse entonces en nuestros peores enemigos”.²⁶

Estas posibles consecuencias sobre la convivencia multicultural vienen también azuzadas por el discurso de Al Qaeda, que proclama su “recuperación de Al Andalus”. El mismo Bin Laden, en un mensaje para la emisora Al Jazeera, había identificado a España como objetivo, en represalia por su participación en la ocupación de Irak y aliada incondicional de Estados Unidos.

Aunque el escenario de prioridades españolas quizás no coincida con las marroquíes, es indudable que la cuestión de la seguridad será un tema central de la nueva agenda bilateral.

Así lo explicita Laura Felíu, de la Universidad Autónoma de Barcelona: “los atentados del 11 de marzo, cuya autoría debe atribuirse casi exclusivamente a militantes marroquíes, suponen un aumento dramático de esta vinculación entre política interna y exterior. La lucha contra el terrorismo en el interior de España implicará una mayor cooperación con Marruecos en el ámbito policial (y ésta afectará seguramente a otros ámbitos de las relaciones bilaterales”.²⁷ En el mismo sentido se expresa el especialista Miguel Hernando

²³ López García, op. cit. Pág. 2.

²⁴ López García, op. cit. Pág. 1.

²⁵ Javier Jordán, *Posibles consecuencias de los atentados de Madrid*, Real Instituto Elcano, marzo de 2004.

²⁶ Javier Jordán, *Al Qaeda en España*, Real Instituto Elcano, marzo de 2004..

²⁷ Laura Felíu, *Hacia la normalización de las relaciones entre España y Marruecos*, FRIDE.

de Larramendi, para quien los atentados "sitúan a las cuestiones de seguridad en el centro de las relaciones hispano-marroquíes".²⁸

Conclusiones

A partir de los atentados de Casablanca y Madrid, Marruecos y España ingresaron a un terreno de vinculaciones mucho más sensible e interdependiente. En este marco, las políticas internas tienen una notable influencia exterior, por lo que cada decisión estratégica cobra una dimensión sumamente relevante.

Se pone en marcha así una dinámica de relacionamiento que exigirá mucha más cooperación e integración, especialmente en algunas cuestiones claves como la seguridad, la lucha antiterrorista, la cuestión migratoria y la cooperación para el desarrollo.

Para Marruecos es esencial mejorar su imagen externa. Aunque no pueda demostrar que está exento de la presencia islamista radical, al menos debería dejar señales claras de su compromiso en la lucha antiterrorista, sin afectar aún más las libertades civiles de sus ciudadanos. En este marco, la puesta en marcha de una definitiva apertura democrática sería el camino más sincero para eludir cualquier reacción islamista. Sería necesario un "autosacrificio" de la monarquía, limitando su poder para preservar el sistema e incorporar al juego político a aquellos sectores que responden principalmente a Justicia y Caridad, hoy autoexcluidos de la arena democrática pero con voluntad de participación. La integración del islamismo moderado sería una manera de limitar cualquier tentación de "pasar al bando" más radical: las agrupaciones salafistas vinculadas a Al Qaeda.

Pero también es imprescindible una política económica y social que brinde oportunidades, estímulos y esperanzas, especialmente para la juventud marroquí. Mientras la miseria, la falta de trabajo y el pesimismo sean "el pan de cada día", habrá un terreno ideal para el cultivo del fanatismo.

España, mientras tanto, deberá implementar una política migratoria coherente y sensata para con su vecino más próximo. Al mismo tiempo, deberá llevar adelante una política de integración de sus colectivos magrebíes, para evitar su adhesión a células extremistas.

Ambos países deberán exorcisar los fantasmas que pueblan su historia común, sobrepasar percepciones equivocadas y asumir un diálogo equilibrado, maduro y productivo.

Bibliografía

AA.VV., "España y Marruecos mas allá de la retórica y la coyuntura política", en *Temas para el Debate* n° 87, 2002.

Agencia Marroquí de Noticias, selección de noticias desde marzo a julio de 2004.

Álvarez-Ossorio, Ignacio, *Movimientos Islamistas Marroquíes: de la moderación al fanatismo*, en *Diario El Mundo*, 19 de marzo de 2004

Avilés, Juan, *Ante la matanza de Madrid: los errores que hemos cometido y los que no debemos cometer*, Fundación Real Instituto Elcano, Madrid, 23 de marzo de 2003.

Avilés, Juan, *¿Es Al-Qaida una amenaza para Europa?*, Fundación Real Instituto Elcano, Madrid, 16 de julio de 2002.

²⁸ Miguel Hernando de Larramendi, op. cit.

Cebolla Boado, Héctor, *Sobre el peligro islamista en Marruecos, un análisis a la luz de los últimos acontecimientos*, Fundación Real Instituto Elcano, Madrid, 18 de octubre de 2003.

Cerezo, Rashid, *Marruecos: el 11 de setiembre llegó en mayo*, Verde Islam, Número 213, 4 de Junio de 2003.

Del Pino, Domingo, *Por una nueva política exterior hacia el Magreb*, Fundación Real Instituto Elcano, 11 de mayo del 2004.

Feliu, Laura, *Hacia la normalización de las relaciones entre España y Marruecos*, FRIDE, mayo de 2004.

Grupo de Estudios Estratégicos, *11-M ¿Al Qaeda en Madrid*, Nota nº 14, 12 de marzo de 2004.

Irujo, José María, "La investigación del 11-M", en Diario *El País*, 18 de julio de 2004.

Jordán, Javier, *Posibles consecuencias de los atentados de Madrid*, Fundación Real Instituto Elcano, Madrid, 16 de marzo de 2004.

Las redes de terrorismo islamista en España. Balance y perspectivas de futuro, Fundación Real Instituto Elcano, Madrid, 13 de octubre de 2003.

Lemus de la Iglesia, Uxía, *Los Elementos constituyentes de la nueva Política Exterior y de Seguridad de España hacia Marruecos (1976-2002)*.

Maghraoui, Abdeslam, *Tras la conexión terrorista marroquí: políticas estatales y wahabismo saudí*, Fundación Real Instituto Elcano, 7 de abril de 2004.

Ministerio de Asuntos Exteriores de España (MAE), *Monográfico sobre Marruecos*, junio de 2004.

Ruiz Miguel, Carlos, *Integrismo y crisis política en Marruecos*, Fundación Real Instituto Elcano, Madrid, 2003.

Saaf, Abdalá, "La miseria y la falta de libertad en Marruecos alientan el terrorismo", en Diario *La Razón*, Madrid, 16 de mayo de 2004.

Tozi, Mohamed, *El fin de la excepción marroquí - El islamismo de Marruecos frente al reto del salafismo*, CIDOB, Barcelona.

Vargas, Víctor Manuel, "La Historia del GICM, el brazo marroquí de Al Qaeda", en Diario *El Tiempo*, Bogota, 2 de abril de 2004.

Villamil, Jenaro, "Teme la comunidad árabe en Madrid oleada de xenofobia tras detenciones", en Diario *La Jornada*, México, 14 de marzo de 2004

Departamento de Africa

Aporte Especial

El Magreb frente a la Asociación Euromediterránea: Retos pendientes

Por **Magdalena Carrancio**

El Proceso de Asociación Euromediterránea (AEM) -impulsado por la Conferencia de Barcelona, en noviembre de 1995- apunta a promover el diálogo entre los miembros de la Unión Europea (UE) y los restantes Estados de la Cuenca Mediterránea, con la finalidad de crear una zona común de paz y prosperidad. Para ello, fueron fijados tres grandes capítulos: la Cooperación política y de seguridad, la Cooperación económica, y un Apartado sobre cuestiones sociales, culturales y asuntos humanitarios, destinado a facilitar la comprensión entre las culturas ribereñas y fomentar los intercambios entre las sociedades civiles.

Ciertamente, la AEM configura una iniciativa promovida y "controlada" por Bruselas. En materia de *Cooperación política y de seguridad*, la UE pretende consensuar los lineamientos de una Carta Euromediterránea para la paz y la estabilidad de la región y aprobar una lista de medidas para fomentar la confianza mutua en materia de seguridad. Este objetivo incluye la adopción de principios como el funcionamiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos. La *Cooperación económica* intenta crear progresivamente una zona de libre comercio para el 2010. Esta se realizará sobre la base de los Acuerdos de Asociación que la UE ya ha firmado con varios países euromediterráneos y abarcaría los productos industriales y los servicios, excluyendo los productos agrícolas. Asimismo, prevé otorgar a los países del sur ayuda financiera y técnica destinada a su desarrollo.

Sin embargo, ya cerca de cumplirse diez años de su puesta en marcha, puede percibirse que el Proyecto Euromediterráneo poco ha contribuido a transformar la difícil realidad que vive la región. Más aún, para algunos analistas, las partes firmantes de esta iniciativa vienen postergando el tratamiento de cuestiones políticas, económicas y sociales, a las que apelan desde el discurso, pero que -en los hechos- no quieren o no pueden modificar.

El presente trabajo tiene, entonces, por objetivo analizar algunos aspectos del Proyecto de AEM, acotando el estudio a los países del Magreb. Cuestiones geoestratégicas como la mayor proximidad geográfica, los lazos coloniales o la provisión de hidrocarburos, hicieron del Magreb un primer punto de acercamiento de la Europa comunitaria con los Terceros Países Mediterráneos (TPM) y, de persistir el Conflicto árabe israelí y la crisis de Iraq, podría perfilarse como la subregión más potable para que la AEM comience a dar sus frutos.

La independencia de los países del Magreb prácticamente coincidió con la constitución de la Comunidad Económica Europea (CEE). De ahí que el Tratado de Roma ya contemplara la posibilidad de conservar las condiciones preferenciales de comercio que sus miembros -por entonces solo Francia- mantenían con sus ex colonias. Así, implementó la firma de Acuerdos Arancelarios y Comerciales (art.113) y Acuerdos de Asociación (art. 238). Estos regularon el Comercio con Marruecos y Túnez, quienes negociaron sendos Acuerdos en 1969.

A comienzo de los setenta, las relaciones con los países magrebíes fueron incorporadas en el marco de Políticas Globales que la CEE había diseñado para la región

mediterránea, con el fin de dar uniformidad a los patrones de relaciones bilaterales que se originaban con los Acuerdos de Asociación. Así se implementaron iniciativas como la **Política Global Mediterránea** (1972-1986) y la **Nueva Política Mediterránea** (1986-1989). Bajo este contexto, en 1973, se firmaron Acuerdos de Cooperación que renovaron los ya existentes con Marruecos y Túnez y que, además, incorporaron a Argelia.

Es en los noventa, con la puesta en marcha de la **Política Mediterránea Renovada** (PMR) (1990-1995), que, sin dejar de lado los aspectos comerciales, se incorporaron también temas sociales, políticos y financieros. En efecto, la PMR privilegió la cooperación sobre lo meramente comercial. En concreto, se pensaba que los modelos vigentes de cooperación con los Terceros Países Mediterráneos -desde ahora denominados Países Mediterráneos no Comunitarios (PMNC)- habían resultado insuficientes.

Frente a este nuevo contexto, los cinco países del Magreb fueron convocados por los miembros mediterráneos de la UE -España, Italia, Francia y Portugal- a los efectos de actuar como foro de reflexión y propuestas a favor de la región. Trataban así de consolidar posiciones comunes ante la tendencia creciente de apoyo al Centro y Este de Europa, por parte de los restantes miembros comunitarios. Las presiones ejercidas dieron sus frutos. La Comisión Europea consideró las propuestas y el Consejo de Lisboa de 1992 se manifestó, por primera vez, sobre los principios de cooperación con el Magreb. Estos debían basarse en: el respeto por el Derecho Internacional; el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y los valores democráticos; la creación de instituciones democráticas que garanticen el pluralismo; y la tolerancia y la coexistencia entre culturas y religiones.

Ciertamente, para Bruselas, las preocupaciones por la estabilidad del Magreb eran prioritarias. Estas se fundaban en, al menos, dos fenómenos cual eran el crecimiento de los movimientos islamistas radicales y el desbordamiento de la cuestión migratoria. Por su parte, los países magrebíes -exportadores de materias primas- ponían sus reclamos en temas como el tratamiento de la deuda externa, las transformaciones tecnológicas, las inversiones, la modernización del tejido industrial, la libre circulación de mano de obra, el proteccionismo de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea. En esto basaban el crecimiento de sus exportaciones competitivas.

Este acercamiento al Magreb es considerado como el punto de arranque para afianzar en Bruselas la necesidad de otorgar una atención y un interés primordiales al Mediterráneo. Mas tarde, el Consejo de Essen (diciembre 94) concretó esta voluntad política y, el Consejo de Cannes (Junio 95) sentó el compromiso financiero de Europa hacia toda la región¹. De este modo, se iniciaba el camino que, en noviembre de 1995, conduciría a la Conferencia de Barcelona donde tomaría forma el Proyecto de AEM.

La Iniciativa Euromediterránea fue muy bien recibida por los países del Magreb quienes encontraron un nuevo marco de diplomacia para renovar sus relaciones con la Europa Comunitaria. Marruecos, Túnez y Argelia, adhirieron como miembros de pleno derecho, y Mauritania tuvo status de observador dado que forma parte de los Acuerdos ACP. Libia - que históricamente se había negado a participar- era excluida a raíz de las medidas del bloqueo dispuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1991.

Desde la Conferencia de Barcelona, se han sucedido cinco nuevas Conferencias Euromediterráneas: Malta (1997), Stuttgart (1999), Marsella (2001), Valencia (2002) y

¹ La ayuda estipulada pretendió contribuir a equilibrar los aportes realizados por la UE a sus dos fronteras, si bien el Sur recibía sólo un 70% de lo asignado al Este. Esta cifra iba a ser repartida de la siguiente manera: un tercio, entre quienes firmaran los Acuerdos Euromediterráneos de Asociación, otro tercio se destinaba a reservas redistribuibles, de forma que cuando los asociados acabaran su cuota pudieran ampliarla, y el tercer tercio se destinaba a proyectos de cooperación regional.

Nápoles (2003). Estas, y los anteriores esquemas diseñados por Bruselas, continuaron mostrando un común denominador: lograr la estabilidad y el desarrollo de la región Mediterránea.

En términos de estabilidad el Magreb no puede considerarse aún una zona segura: el Conflicto del Sahara Occidental y la crisis de Argelia empañan este objetivo. Mucho más lejana está la posibilidad de que los gobiernos magrebíes -que fundan su legitimidad en los principios del Islam- abracen plenamente prácticas occidentales basadas en los valores democráticos que el Proyecto reclama. Por otra parte, desde la perspectiva del desarrollo, estos países se encuentran muy distantes de los niveles de bienestar de sus vecinos del norte. El agotamiento de los modelos de organización socio política y económica desde la segunda mitad de los ochenta, ha provocado numerosas revueltas populares que predicen un alto nivel de inestabilidad social en el futuro inmediato. A esto se agrega el endeudamiento externo que ha afectado a la región con variados ritmos y dificultades, el crecimiento demográfico, el éxodo rural y la aglomeración urbana -en ciudades carentes de infraestructura y servicios sociales necesarios para cubrir las necesidades básicas de la población-, políticas económicas que originaron exclusión social, entre otras variables de desestabilización creciente.

Sin embargo, pese a la ausencia de una paz asegurada, la UE fue avanzando progresivamente hacia la consolidación de relaciones comerciales: **Túnez** concluyó sus negociaciones en junio de 1995, ese mismo año firmó el Acuerdo de Asociación que entró en vigencia en marzo de 1998; **Marruecos**, concluyó negociaciones en noviembre de 1995, firmó el Acuerdo de Asociación en febrero de 1996, el que entró en vigor en marzo de 2000. **Argelia**, por su parte, concluyó negociaciones en diciembre de 2001 y firmó el Acuerdo de Asociación en junio de 2002, demorándose, por el momento, su entrada en vigor. Por último, **Libia** que permanecía ausente del Diálogo Euromediterráneo, fue invitada a participar como observador en 1999.

Consecuentemente, en los hechos puede observarse que, no obstante el discurso de Bruselas a favor de la estabilidad y el desarrollo, persiste un cierto interés por mantener el status quo y los privilegios comerciales. Esto ha generado un esquema de mutua conveniencia para ambas orillas: La UE impulsa relaciones comerciales que le ofrecen ventajas sustanciales². Por su parte, para los países del Magreb, la interdependencia asimétrica le brinda, al menos, mercados seguros para su producción de materias primas³. Así, la implementación de nuevas políticas mediterráneas, no ha modificado la base fundamental de estos Acuerdos⁴.

En efecto, con la finalidad de promover el desarrollo industrial de los países mediterráneos, Bruselas continúa concediendo el libre acceso al mercado comunitario a todos los productos manufacturados provenientes de esta región, recibiendo a cambio el tratamiento Nación Más Favorecida para sus propios productos industriales. Ciertamente, no es de esperar que las exportaciones de la industria magrebí afecten la producción europea. Más aún, a partir de este Proyecto, es probable el traslado de empresas

² Cabe aclarar que el Capítulo económico del Proceso de Barcelona no reviste la misma importancia para todos los miembros de la Unión Europea: Los intercambios de los países de Europa central con África del norte son limitados y, si bien, los de España, Francia e Italia son mucho más significativos, no son vitales para ninguno de estos tres países.

³ La Unión Europea proporcionó, en 1998, el 74,1% de las importaciones de Argelia, el 67,3% de las de Libia, el 58,8% de las de Marruecos y el 71,5% de las de Túnez. En 1997, la UE abrió sus mercados al 61,5% de las exportaciones argelinas, al 69,7% de las de Marruecos y al 78,3% de las de Túnez. Esto genera una interdependencia asimétrica en la que los países del Magreb dependen de sus intercambios con Europa, mientras que la apertura de Europa se lleva a cabo, en primer lugar, a través del desarrollo de los intercambios intraeuropeos.

⁴ Sí se incluyeron nuevos temas como el establecimiento del libre comercio según las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el establecimiento de normas de propiedad intelectual, los servicios, la competencia, los subsidios estatales y los monopolios, etc., pero no se modificaron las condiciones de privilegio a las cuales se hizo mención.

europas al Magreb para beneficiarse de mano de obra barata, aunque esto aún requiere de algunos ajustes en el sistema productivo magrebí. En este sentido, la iniciativa Euromediterránea y el propio espíritu comercial de la UE, tienden a favorecer el desarrollo del sector privado, cuestión de difícil implementación en países en los que -a excepción de Túnez y, en menor medida, Marruecos- el Estado desempeñó y aún ejerce un papel fundamental en la producción industrial.

Por otra parte, la oposición de algunos socios comunitarios a abrir el mercado de la UE a los productos agrícolas y textiles, priva al Magreb de las ventajas competitivas de su producción. En efecto, los bienes primarios de los PMNC quedan sujetos a limitaciones de calendario, contingentes y precios de referencia, situación muy alejada de la reciprocidad a la que estos países aspiran.

Consecuentemente, los beneficios que el Magreb ha obtenido de los Acuerdos de Asociación son limitados. Más aún, la apuesta por el desarrollo de los países mediterráneos, mediante el aumento del comercio, se ha orientado a aquellas áreas que menos impacto podían provocar en los productos comunitarios, en lugar de poner la mira en sectores como el primario, con resultados más favorables para la región.

Por último, la decisión adoptada por Bruselas en 1999, de limitar al 1,27% del PNB de la Unión sus transferencias financieras hacia el exterior pesa todavía más sobre la cooperación Euromediterránea, ya en desventaja en relación a la ayuda brindada a los Países de Europa Central y Oriental. Más aún, el Programa de Asistencia Comunitaria para el conjunto de los socios del sur del Mediterráneo para el período 2000-2006 no deberá exceder una media anual de mil millones de euros en donaciones y mil millones en préstamos del Banco Europeo de Inversiones, es decir, el 26% de la ayuda pública europea a esta región, mientras que la ayuda bilateral, fundamentalmente francesa y alemana, representa el 73%, pero está al margen del Proceso de Barcelona.

A modo de conclusión entonces se puede observar el lento avance del Proceso de AEM, si bien la región magrebí podría constituir un primer escenario para su implementación frente a un Mediterráneo oriental mucho más conflictivo. Ciertamente, la realidad política magrebí dificulta, en el corto plazo, las expectativas de estabilidad y seguridad que la iniciativa Euromediterránea ha proyectado. En este sentido, es muy probable, que los líderes de la región hayan hecho "concesiones verbales" demasiado ambiciosas en vista de la legitimidad islámica a la que sus regímenes políticos deben responder.

En términos económicos, sin embargo, podría esperarse una actitud verdaderamente cooperativa de parte de la UE. Esta debería apuntar a abrir mejores posibilidades para la agricultura como para la industria magrebí, tanto en término de exportaciones como de inversión extranjera directa. Solo ejerciendo un verdadero liderazgo en su acción exterior, la UE podrá ir sentando las bases para la estabilidad y el desarrollo de una zona cuyo futuro le está indisolublemente unido.

Departamento de Africa

Aporte Especial

10 años de democracia en Sudáfrica. Balance y perspectivas

Por **Maria Gisela Pereyra Doval** y **Verónica Taulamet**

Tras años de soportar un régimen racial que despojó a los sudafricanos de sus derechos civiles y políticos básicos, en el año 1994, luego de un proceso de transición liderado por De Klerk, se celebraron las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica. Diez años después este país por tercera vez consecutiva eligió democráticamente a sus representantes.

El partido del legendario primer presidente democrático, Nelson Mandela, el African National Congress (ANC), fue el vencedor de los últimos comicios logrando mantenerse en el gobierno durante los 10 años de democracia. Esta vez el candidato elegido presidente fue Thabo Mbeki que inicia su segundo mandato consecutivo desde 1999.

En este artículo repasaremos los hechos más relevantes de las últimas elecciones para realizar luego un balance de estos 10 años de democracia remarcando tanto los avances más significativos como las carencias más preocupantes.

Elecciones 2004: El Predecible Triunfo del ANC.

El 27 de abril de 1994, por primera vez en su historia, la población sudafricana, blancos y negros, eligieron democráticamente a sus gobernantes. En aquella ocasión Nelson Mandela se convirtió en el presidente de los sudafricanos. Hoy, 10 años después, este día representa el "Día de la Libertad"; este mes, el mes de las terceras elecciones consecutivas; y este año, el de la reafirmación del sistema democrático.

El ANC fue el partido privilegiado durante la campaña, y Thabo Mbeki, con una popularidad en aumento desde el año pasado, el candidato indiscutido para ocupar nuevamente el cargo de Presidente. Cabe aclarar que el sistema político es republicano con la característica de que el Jefe de Estado y del Poder Ejecutivo es elegido por el parlamento y su mandato tiene una duración de 5 años con opción a una reelección. De esta forma, la misma persona, en la figura presidencial, es Jefe de Estado y de Gobierno y es a su vez nombrada por el Poder Legislativo.

El Poder Legislativo, por su parte, está conformado por dos Cámaras: la Asamblea Nacional, que cuenta con 400 escaños elegidos por el sistema de representación proporcional; y el Consejo Nacional de Provincias, antiguamente denominado Senado, que está compuesto por 90 escaños, diez por cada una de las nueve legislaturas provinciales. El mismo posee poderes especiales para proteger los intereses regionales, incluyendo la salvaguarda de las tradiciones lingüísticas y culturales entre las minorías étnicas. Los mandatos para los integrantes de ambas Cámaras tienen una duración de 5 años.

En las últimas elecciones fueron elegidas tanto las autoridades legislativas y ejecutivas nacionales como las autoridades provinciales. A pesar de que la estructura partidaria de Sudáfrica es muy variada, el ANC superó en cantidad de votos a todas las opciones. Competieron para estas elecciones 37 partidos políticos, la mayoría de los cuales no

cuentan con un electorado mayor a un dígito. Los partidos más fuertes de la oposición son, hoy por hoy, la Democratic Alliance (DA) y el Inkatha Freedom Party (IFP).

La DA nace como una coalición entre el ex Democratic Party (DP) y el New National Party (NNP). En el año 2001 éste último decide separarse, compitiendo en las elecciones 2004 de manera independiente. Por otro lado, el IFP es uno de los únicos sobrevivientes de la era Apartheid y tiene su mayor influencia en la provincia de KwaZulú-Natal. Este antiguo Bantustán, ahora provincia, gobernado desde el año 1977 por el Inkatha Freedom Party (IFP), es el territorio más convulsionado por episodios de violencia en los últimos 20 años. Las razones más fuertes que explican su permanencia se relacionan con la existencia de una especie de patronazgo, con un aparato de represión propio, una base campesina importante y el control sobre la tierra de los líderes regionales como un recurso de poder.

Si bien desde la transformación del régimen, el IFP fue perdiendo gradualmente influencia, logró mantener el control del gobierno durante las elecciones de 1994 y las de 1999. En cada uno de estos eventos electorales la violencia resurgió como producto de la competencia entre el ANC y el IFP. Esta situación no fue distinta a la vivida en las últimas elecciones de 2004; si bien los episodios de las elecciones anteriores fueron más agresivos, igual se presentaron disturbios al momento del escrutinio. Estas elecciones han sido históricas en esta provincia, ya que por primera vez el IFP perdió los comicios locales que, esta vez, fueron favorables al ANC.

Tanto el IFP como la DA, tuvieron un pobre desempeño en los comicios. La DA sacó el 13,05% de los votos a nivel nacional y el IFP 5,84%, frente al 69,68% del ANC. Esto se explica en parte por el origen y estructura de los partidos de la oposición. La DA representa a la minoría blanca que, en cierta forma, participó del proceso de transición de la década del noventa y mantiene una plataforma de gobierno basada en la defensa de los valores democráticos; el tema de la seguridad y la eliminación de la violencia; y la defensa de la propiedad privada. La ideología política del partido está caracterizada por el pensamiento de centro-derecha y tiene un fuerte componente de políticas neoliberales. Mientras que el IFP mantiene su base de poder solamente en KwaZulú-Natal. Como vimos anteriormente este partido tiene una estructura bastante fuerte en esta provincia y es por esto que se encuentra en el tercer lugar de los últimos comicios. Es interesante señalar que el IFP en los últimos años ha perdido sostenidamente su influencia hasta perder las elecciones en su propia provincia a manos del ANC. Una presencia mayor de éste último en la región y un desgaste pronunciado de este antiguo partido, sumada a los recurrentes episodios de violencia precipitaron estos resultados.

Más allá de la abrumadora diferencia de resultados a favor del ANC en las elecciones nacionales, y del triunfo en las nueve provincias, en las tres provincias con más índices de violencia en el país, esta diferencia disminuyó notablemente. Es así como en KwaZulú-Natal el ANC sacó 47,29 % de los votos contra el 35,31 % del IFP, en Gauteng el ANC sacó el 68,47 % frente al 20,6 % del DA y en Western Cape el ANC sacó el 46,11 % de los votos frente al 26,92 % del DA. Esto es una muestra de la incidencia del tema de la violencia en la decisión de dar apoyo al partido oficialista. Cabe aclarar, que en estos últimos diez años la violencia ha disminuido progresivamente y esto se ha reflejado en un aumento de los votos a favor del partido gobernante en las regiones conflictivas.

Sin lugar a dudas el dato más importante de las elecciones en Sudáfrica es la participación de la población en estos comicios. En un país que instauró su sistema democrático hace diez años y no tiene sufragio obligatorio, el 75 % de las personas habilitadas para votar participó del evento democrático. Aunque el porcentaje de participación disminuyó desde los comicios de 1999, esto no puede interpretarse más que como un hecho predecible

dada la estabilidad del sistema democrático del país, ni puede perderse de vista el elevado nivel de participación que la población sudafricana sigue teniendo.

Otro dato interesante es la cantidad de observadores requeridos para la ocasión. En anteriores elecciones cientos de observadores, entre locales y extranjeros, fiscalizaron los comicios; este año el número de los mismos ha disminuido hasta 90 locales y 200 internacionales. Estos datos demuestran claramente la maduración democrática que el país ha alcanzado.

¿Por qué ganó el ANC?:

Como vimos anteriormente el triunfo del ANC fue indiscutido, y amplió su base de legitimación. Pero ¿a qué factores obedece este apoyo masivo? Existe un cúmulo de variables que explican estos índices.

La plataforma de gobierno, la tradición del partido y su pensamiento político seguramente explican parte de este triunfo. El ANC tiene una estructura partidaria amplia y sólida que llega a todos los rincones del país. Además representa a la gran mayoría de la población negra sudafricana que sufrió las consecuencias del sistema separatista racial y luchó para abolirlo. En estos 10 años de gobierno si bien existen grandes déficit en cuanto a la calidad de vida de esta misma población, el ANC ha sabido cambiar la imagen del país en el mundo, ha convertido a Sudáfrica en un país atractivo para la inversión extranjera directa, ha desmantelado totalmente el sistema de discriminación racial de la estructura social y ha puesto en marcha las instituciones democráticas.

Por otra parte, los grandes temas que integraron su plataforma en estas últimas elecciones se corresponden con los grandes problemas que Sudáfrica tiene que solucionar. Los pilares de la campaña fueron, el llamado "cambio acelerado" que propone la creación inmediata de puestos de trabajo para combatir el desempleo, proporcionar los servicios básicos a la población que carece de ellos, luchar contra la pobreza, brindar seguridad a los hogares y luchar contra el flagelo del SIDA. También la plataforma manifiesta la posición sudafricana en el mundo con respecto a la defensa de los derechos y demandas de los países en desarrollo.

Otro factor que explica el triunfo masivo del ANC es la ausencia de una alternativa de poder entre los partidos de la oposición. En estos diez años ninguna fuerza política ha logrado crear una estructura y una base de consenso que pueda presentarse como oposición y alternativa al modelo oficial y que pueda representar a una parte importante de la población. De esta forma, el ANC gana las elecciones no solo por sus méritos sino por la carencia de una fuerza opositora.

Otras interpretaciones analizan la incidencia del efecto residual de apoyo irrestricto al partido que le dio la liberación al pueblo sudafricano. Así, algunos analistas sostienen que a 10 años del la instauración del nuevo régimen el componente afectivo constituye un factor importante en la decisión de voto.

De esta forma, el ANC está en condiciones políticas inmejorables, ha ampliado su base de legitimación, tiene mayoría absoluta en el Parlamento, y dirige los gobiernos de las 9 provincias. Sin embargo, no podemos decir que gobernar en este nuevo período será tarea sencilla para el ANC. Sudáfrica enfrenta problemas estructurales graves que las anteriores administraciones no pudieron resolver y que no parecen solucionables en un futuro próximo, como ser:

- La tasa de desempleo supera el 30%, los altos índices de desocupación reflejan un problema socioeconómico estructural que no puede solucionarse con medidas a corto plazo o “aceleradas”, sino que requieren de una estrategia y planificación constante y duradera.
- Cinco millones de sudafricanos de los 45 millones de habitantes tienen SIDA. Una de las principales críticas a la administración de Mbeki hace referencia al mal manejo de la epidemia y a la falta de respuesta del gobierno a esta amenaza.
- Las condiciones de pobreza extrema de importantes sectores de la sociedad sudafricana transforma en urgente la ampliación de la acción del Estado para garantizar condiciones indispensables de subsistencia. Por su parte, la desigualdad de la riqueza ha aumentado y algunas personas todavía no ejercen su derecho a la propiedad.
- La violencia y la criminalidad también muestran datos preocupantes ya que el número diario de asesinatos en Johannesburgo está entre los más altos del mundo.
- En Política Exterior, Sudáfrica no ha hecho nada en cuanto a las denuncias de abusos a los derechos humanos en Zimbabwe, lo cual ha generado un profundo malestar en la sociedad sudafricana.

Todas estas carencias, relativizan los buenos augurios del ANC para estos cinco años, dado que si bien es el partido mayoritario, también es el único responsable ante la población, de solucionar los problemas, aliviar el sufrimiento de grandes porciones de la población y generar un desarrollo sustentable en Sudáfrica.

Lineamientos principales de la Sudáfrica democrática:

Para comprender las principales transformaciones acontecidas a partir del nuevo régimen, analizaremos el documento elaborado por el gobierno “Towards Ten Years of Freedom – Review –”, el cual realiza un recuento de los cambios vividos en Sudáfrica en estos 10 años y abre el camino para esbozar algunas reflexiones al respecto.

Durante estos diez años de Democracia, Sudáfrica ha logrado concretar importantes cambios tanto en la dimensión interna como externa de su sistema político, socio-económico y cultural. Si tenemos en cuenta la compleja y tormentosa historia política de este país y el corto período transcurrido desde la abolición del Apartheid y la instauración de un régimen democrático, evidentemente el balance será positivo puesto que los cambios acaecidos son cuantiosos y en algunos aspectos profundos. Esto no implica desconocer los tremendos déficit que este país todavía no ha logrado revertir, ni las dificultades que interna y externamente presenta para consolidarse como una nación democrática, igualitaria y económicamente equitativa. A esto se agregan los inconvenientes que enfrentan hoy en día las naciones consideradas “en desarrollo” o “subdesarrolladas”. Sudáfrica debe dar respuesta, entre otras cuestiones, a importantes problemas internos que afectan la paz, la cohesión y la igualdad social.

Pero el camino recorrido es corto y muy fructífero. En estos 10 años se han comenzado a definir tendencias que evidencian una estabilidad democrática, un alentador crecimiento económico y un mayor protagonismo en la escena internacional.

Redefiniciones internas y nuevos desafíos:

Un aspecto fundamental del comienzo de la democracia en este país es el cambio de mentalidad estructural que fue necesario realizar como punto de partida para una Sudáfrica diferente. Se comenzó a pensar en un nuevo orden social, con nuevos objetivos y programas para implementarlos, cuyo eje central fuera la participación política de las personas de raza negra, y la transformación de los criterios de discriminación racial en las diferentes instancias sociales. Un claro ejemplo de la segregación racial existente hasta 1994 es la ausencia de amplios sectores de la población en las estadísticas oficiales con respecto a la urbanización, mortalidad, entre otras. Es decir que fue preciso redefinir y adaptar el Estado a un concepto de nación más incluyente.

Para ello debieron crearse nuevas entidades estatales y reestructurar todo el aparato de servicio público, como así también formalizar y reorganizar los sistemas legislativo y policial, y establecer una nueva organización de los gobiernos locales y provinciales, coordinando el trabajo del gobierno en todas sus esferas.

Estas transformaciones vinieron de la mano de políticas para "modernizar y mejorar la productividad del país". Estas reformas provocaron, como en el resto de los países subdesarrollados que llevaron adelante este tipo de medidas, importantes desajustes sociales especialmente en lo referente a la distribución de la riqueza.

Otro aspecto de la estructura interna del país que debió ser atendida con prioridad por el nuevo régimen es la cuestión de la seguridad y la violencia imperante en el país. La violencia política sufrida en los primeros años de democracia presentaba niveles altamente preocupantes. Según el discurso oficial, estos índices han logrado disminuirse especialmente en lo que respecta a KwaZulú-Natal y algunas áreas del Western Cape y Gauteng.

La supresión de la violencia en estas tres provincias ha sido la prioridad de los gobiernos del ANC. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha tenido un importante rol en este aspecto no solo en identificar las causas de la violencia política sino también en investigar y denunciar las violaciones a los derechos humanos reivindicando la dignidad de las víctimas. De esta manera, si bien las intervenciones políticas fueron exitosas en reducir los niveles de intolerancia y violencia política, subsisten aún hoy importantes focos de violencia en este país.

Con relación al tema del terrorismo, el nuevo gobierno definió tres áreas fundamentales en las cuales es preciso trabajar: terrorismo urbano, extremismo blanco de derecha y terrorismo internacional. La lucha en contra del terrorismo urbano es donde el gobierno considera que se ha alcanzado mayor éxito. En lo que respecta al extremismo blanco, existe también una política activa del gobierno, si bien no se ha logrado eliminar esta manifestación de violencia en su totalidad. Por último, el terrorismo internacional constituye un fenómeno complejo que supera la acción limitada de un solo Estado. En este sentido, Sudáfrica ha participado constantemente en los distintos ámbitos internacionales en los que se condena y se lucha contra el terrorismo internacional.

De esta forma si bien los nuevos departamentos y sistemas de seguridad y justicia han resultado operativos, aunque quedan muchos aspectos por mejorar, el principal déficit del nuevo régimen es no haber logrado una acción coordinada para prevenir el crimen y el delito. Es decir, mejorar las condiciones de vida de la población y combatir las causas que originan las diferentes formas de violencia.

Sudáfrica en el Mundo:

En este apartado haremos hincapié en la reorganización de las Relaciones Internacionales sudafricanas, en sus aspectos políticos, económicos y de defensa. En los últimos 10 años, Sudáfrica ha tenido que reconstruir no sólo los lineamientos y objetivos generales de su política exterior, sino también la estructura a partir de la cual se vincula con el mundo.

La política exterior del nuevo régimen constituye el ámbito donde más profundas transformaciones se han realizado. En términos generales, las principales reformas que se hicieron estuvieron vinculadas al cambio de funcionarios y la transformación de las organizaciones de inteligencia y planeamiento de la defensa y la política exterior, conjuntamente con la nueva formación de cuadros diplomáticos que promuevan las nuevas prioridades de política exterior paz y seguridad de Sudáfrica.

Los objetivos en materia de relaciones exteriores se definieron en torno a garantizar la aceptación de Sudáfrica en la Comunidad Internacional y establecer relaciones con otros países. Esta estrategia fue diseñada para expandir y diversificar las relaciones comerciales y atraer Inversión Extranjera Directa, buscando "vender" a Sudáfrica como un mercado atractivo. En el aspecto político-diplomático, esta estrategia apuntaba a promover valores tales como el respeto internacional de los Derechos Humanos y la Democracia, promover la paz internacional, la seguridad y estabilidad (incluyendo la prevención y manejo del crimen internacional). Con respecto a su papel regional, se estableció la prioridad en el cumplimiento de los intereses y el desarrollo de África y la promoción de la Cooperación Sur-Sur para luchar por la transformación de las relaciones Norte-Sur. Existe en este cambio de política exterior de la nueva Sudáfrica una importante tendencia: definir para Sudáfrica un rol de líder no solo del continente africano, si no también de los países en desarrollo.

En lo referente al tema de la seguridad, las transformaciones también fueron profundas. No solo debieron cambiarse todos los cuerpos militares encargados de la defensa de Sudáfrica, cómplices del régimen del Apartheid, sino que fue necesario crear todo un conjunto de conceptos nuevos sobre la seguridad que hiciera recuperar la legitimidad al ejército. La Nueva Doctrina de Seguridad Nacional, la formación de una milicia voluntaria, la creación de nuevos símbolos patrios, son elementos de esta nueva concepción de seguridad post-1994. Otros cambios también fueron realizados en el área de defensa. La renovación tecnológica y la capacitación de recursos humanos ayudaron a actualizar a las fuerzas de defensa sudafricanas, transformándolas en un cuerpo más chico y efectivo y con más responsabilidades.

Estos nuevos funcionarios y militares debieron enfrentar múltiples desafíos. En primer lugar, lograr integrarse con lo que quedaba de la vieja burocracia. Pero, además, tuvieron la responsabilidad de volver a presentar a Sudáfrica en el mundo, ahora con nuevos objetivos y principios, y poder cambiar la imagen de un país, en un mundo profundamente interdependiente, en el cual la política exterior de los países está interconectada con los temas económicos y de seguridad. Aunque, sin duda, el desafío más importante que enfrentó y enfrenta hoy en día Sudáfrica es revertir los elevados índices de pobreza, desigualdad social y de distribución de la riqueza.

El primer paso para reinsertar a esta nueva Sudáfrica en el mundo, fue recomponer las vinculaciones diplomáticas y comerciales con la mayoría de los países del mundo que habían cortado relaciones en la era Apartheid. Esta política quedó demostrada no solo por el aumento de representaciones en Sudáfrica y de este país en otros países sino también

por un aumento en la participación en diversos ámbitos multilaterales. El hecho de que muchas de estas reuniones y conferencias¹ se hayan realizado en la misma Sudáfrica es una clara muestra de la voluntad de la Comunidad Internacional de reinsertar al país en el escenario mundial. Estos eventos han mejorado el perfil internacional de Sudáfrica, y han tenido un poderoso impacto en la economía sudafricana.

Más allá del protagonismo obtenido en la arena internacional, el gobierno sudafricano ha desarrollado estrategias específicas para aumentar sus vinculaciones comerciales. Para generar un crecimiento en la economía, se optó por una política de diversificación y ampliación de sus relaciones. En este sentido, además de los aliados tradicionales, Sudáfrica ha expandido sus redes hacia Sudamérica, Asia y África.

Se ha identificado a un importante número de países como aliados estratégicos con los cuales se establecieron acuerdos de libre comercio a través de diferentes modalidades. Entre las vinculaciones más importantes se encuentra la firma del African Growth and Opportunity Act, un acuerdo para liberalizar el comercio entre un número importante de países africanos con Estados Unidos, y un acuerdo de Cooperación en comercio y desarrollo con la Unión Europea, que entró en vigencia el 1 de enero de 2000, junto a numerosas iniciativas en curso².

En el plano multilateral, en el marco de la OMC; Sudáfrica desempeñó un importante papel, tanto en el lanzamiento del Programa de Doha para el Desarrollo como en las posteriores negociaciones agrícolas en la Conferencia de Cancún como parte del núcleo duro del G-20. Por otra parte, desde el punto de vista de la integración regional, el lanzamiento del NEPAD ha potenciado los esfuerzos de integración del continente africano. Asimismo, Sudáfrica se ha inclinado por el fortalecimiento de la SADC, la SACU y el Area Monetaria Común.

De esta forma, en estos 10 años, Sudáfrica ha jugado un rol muy activo en el comercio mundial incrementando en forma sustancial su intercambio comercial y promoviendo activamente la inversión extranjera directa. Sin embargo, estos cambios no han logrado revertir los preocupantes índices económicos del país que denotan una importante debilidad en su estructura económica. Sudáfrica muestra hoy en día muy altos niveles de desocupación, con una tasa de desempleo del 30%, gran parte de la población por debajo del nivel de pobreza y una altísima polarización de la riqueza. Indudablemente estas cifras constituyen uno de los asuntos pendientes más críticos en estos años de democracia, y deja en claro que el solo incremento del comercio, no conduce automáticamente a un mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad sudafricana.

Por último, en el plano de la Cooperación Sur-Sur, la cooperación continental tuvo una clara prioridad en la agenda exterior del nuevo gobierno democrático. Sudáfrica lideró la reconstrucción de la Organización de la Unión Africana con el objetivo de consolidar al

¹ IX Reunión de la UNCTAD, en 1996; la Reunión de No Alineados, en 1998; la Reunión de los Jefes de Gobierno del Commonwealth, en 1999; la Conferencia Mundial sobre SIDA, en 2000; la Conferencia Mundial de Naciones Unidas en contra del Racismo, la Xenofobia y lo relativo a la Discriminación, en 2001; la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sustentable, en 2002; y la Conferencia de la Unión Africana, en 2002, entre otras.

² Las negociaciones entre SACU y EFTA para establecer un área de libre comercio están siendo llevadas a cabo desde mayo de 2003 (para ser concluidas en enero de 2005); las negociaciones entre SACU y USFTA también se iniciaron en mayo de 2003 para ser concluidas en enero de 2005; las negociaciones con MERCOSUR, China e India para establecer áreas de libre comercio están siendo llevadas a cabo desde el año pasado. El Protocolo de Comercio de la SADC que fue firmado en 1996; el nuevo acuerdo de la SACU fue concluido en octubre de 2002.

bloque continental e impulsó la Nueva Iniciativa Africana y el Plan de Desarrollo del Milenio junto a otros países.

También en el marco de la cooperación con los países del sur, Sudáfrica estrechó relaciones con algunos países latinoamericanos y formó parte de algunas organizaciones y grupos de países del tercer mundo en busca de defender los reclamos de los países en desarrollo. En esta línea se pronunció a favor del desarrollo equitativo de las naciones pobres, la defensa de los derechos humanos, la lucha por un orden internacional multipolar, la paz y la seguridad mundial.

Dos claros ejemplos del accionar sudafricano en este sentido son la creación de la Comisión Trilateral con Brasil e India, y la conformación posterior del grupo IBSA integrado por estos tres países y la participación como parte del núcleo duro del G-20 que negoció en la Conferencia de la OMC de Cancún, la disminución de los subsidios agrícolas por parte de los países desarrollados. Así la Sudáfrica democrática demostró su intención de defender junto al resto de los países del Sur, las demandas de las naciones empobrecidas.

Reflexiones Finales:

Evidentemente el Balance de estos 10 años de Democracia tiene un resultado positivo para Sudáfrica como país y, especialmente, para el ANC como partido gobernante. El voto masivo de la gente al ANC le da una oportunidad histórica a este partido de tener una capacidad de acción absoluta, con mayoría propia en el Parlamento y control de todas las provincias. Pero también este gran margen de acción significa una responsabilidad muy grande para el partido y sus dirigentes puesto que la expectativa de la población con relación a los cambios y avances que este pueda desarrollar es mucho mayor y los tiempos de las necesidades de la gente acortan los plazos del gobierno.

La cifra superior a los 10 millones de votos demuestra que la población sudafricana confía en las habilidades del partido dominante de solucionar los problemas más acuciantes. Este constituye el desafío más importante para el gobierno Sudafricano: mantener el apoyo incondicional de sus ciudadanos.

Por su parte el desafío más importante de la oposición es conformar una fuerza alternativa con una propuesta inclusiva y viable que sepa construir consensos y canalizar el descontento de la población a raíz de las políticas oficiales. Así, será factible pensar en otro partido y en un futuro gobierno alternativo.

Creemos que la lectura más importante de estas elecciones 2004, es la que valora este acontecimiento como un apoyo masivo al régimen democrático y la liberación del sistema del Apartheid, más allá del apoyo al partido oficial. Como dijimos antes, existen múltiples factores que pueden explicar la conducta de los votantes sudafricanos, pero en todos los casos fue la intención de ejercer sus derechos ciudadanos a elegir sus propios gobernantes lo que condujo a la gran mayoría de la población a votar el 14 de abril. Tal como sostienen algunos analistas políticos en Sudáfrica el "tiempo de las elecciones" es, antes que nada, un período para celebrar la libertad.

Bibliografía:

ARCHIBALD, Sally, Decline in voter turnout 'a sign of a mature democracy', en Diario Saturday Star, Johannesburg, Sudáfrica, 17 de abril de 2004.

CARTER, Chiara, The highs and lows of electioneering in the run-up to polling day 2004, en Diario This Day, Soweto, Sudáfrica, 14 de abril de 2004.

COHEN, Tim, O'GRADY, Kevin, Making sense of poll results, en Diario Business Day, Johannesburg, Cape Town y Durban, Sudáfrica, 16 de abril de 2004.

DE KLERK, F., Civil society can be new opposition, en Diario The Star, Johannesburg, Sudáfrica, 21 de abril de 2004.

DIKENI, Sandile, Ten years after, as seen from the moon, en Diario This Day, Soweto, Sudáfrica, 14 de abril de 2004.

FRIEDMAN, Steven, Slaying the myth of voter apathy, en Diario Business Day, Johannesburg, Cape Town y Durban, Sudáfrica, 16 de abril de 2004.

How the election numbers crunched, en Diario Sunday Times, Carletonville, Sudáfrica, 18 de abril de 2004.

How the provinces voted..., en Diario Saturday Star, Johannesburg, Sudáfrica, 17 de abril de 2004.

<http://www.anc.org.za>

<http://www.da.org.za>

<http://www.ifp.org.za>

MAMAILA, Khathu, RANTAO, Jovial, Now it's time to stand and deliver, en Diario The Star, Johannesburg, Sudáfrica, 16 de abril de 2004.

Massive ANC victory eclipses gains for DA and De Lille as NNP is slaughtered, en Diario Business Day, Johannesburg, Cape Town y Durban, Sudáfrica, 16 de abril de 2004.

MDE, Vukani, IFP's traditional bastion may deliver surprises, en Diario This Day, Soweto, Sudáfrica, 14 de abril de 2004.

MSOMI, S'thembiso, Mbeki's Extreme Makeover, en Diario Sunday Times, Carletonville, Sudáfrica, 11 de abril de 2004.

Power Broker, en Diario The Star, Johannesburg, Sudáfrica, 13 de abril de 2004.

QUINTAL, Angela, Nats die as ANC and DA collect more support, en Diario This Day, Soweto, Sudáfrica, 16 de abril de 2004.

QUINTA, Christine, The sacrifices made before 1994 still inspire SA, en Diario Business Day, Johannesburg, Cape Town y Durban, Sudáfrica, 16 de abril de 2004.

SEFARA, Makhudu, Despite votes, ANC uncertain of KwaZulu Natal, en Diario The Star, Johannesburg, Sudáfrica, 16 de abril de 2004.

SEFARA, Makhudu, Opposition still picking up pieces, en Diario The Star, Johannesburg, Sudáfrica, 19 de abril de 2004.

SMITH, Gail, It's women who drive the voting machine, en Diario This Day, Soweto, Sudáfrica, 14 de abril de 2004.

TERREBLANCHE, Christelle, Voter numbers down as 'alienation' takes hold, en Diario The Sunday Independent, Johannesburg, Sudáfrica, 18 de abril de 2004.

Departamento de Africa

Aporte Especial

A 10 años del genocidio en Rwanda

Por **Diego Buffa**

"El genocidio en Ruanda no debería jamás haber ocurrido. Ni la Secretaría General de las Naciones Unidas, ni el Consejo de Seguridad, ni los Estados Miembros, ni la prensa internacional, prestaron suficiente atención a la evidente acumulación de síntomas de desastre"

Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas
Mensaje en el décimo aniversario del genocidio en Rwanda.

El pasado miércoles 7 de abril se conmemoró, después de diez años, la masacre en Rwanda de más de 800 mil personas -cifra aún no confirmada: se cree que hubo más de un millón de víctimas-. La ceremonia central se realizó en Kigali, capital del país, en el estadio nacional Amahoro -que en kinyarwanda, la lengua oficial significa paz- ante 25 mil personas que colmaban el lugar y con la presencia de seis jefes de Estado. Fueron notables las ausencias de los dirigentes de la ONU y de la mayoría de los países occidentales. Este hecho no pasó inadvertido para el presidente Paul Kagame, quien los denunció públicamente por la actitud vergonzosa que les cupo durante el conflicto de 1994, en particular a las Naciones Unidas y a Francia.

Fue un acto cargado de emoción, con el relato descarnado de las víctimas y tres minutos de silencio en memoria de quienes sufrieron el genocidio, que ha sido calificado como uno de las peores tragedias del siglo XX. En sólo cien días se exterminó a una décima parte de la población de Rwanda bajo la mirada indiferente de la comunidad internacional.

En los últimos diez años las Naciones Unidas y varios países, incluido el Vaticano, han pedido perdón por su falta de interés ante la masacre, o por haber ayudado indirectamente en el conflicto. No es el caso de Francia, que hasta hoy ha mantenido su silencio.

Sin embargo, el referido arrepentimiento, no se ha manifestado en un cambio de actitud hacia la población rwandesa, en particular, ni a la del resto del África, en general. Como ejemplo preocupante, está sucediendo lo mismo en Sudán, donde la comunidad internacional, con su silencio y con el abandono de la población civil, está colaborando indirectamente -en el mejor de los casos- a que se cometa un genocidio; cuando no lo hace en forma directa, brindando apoyo militar, armas y ayuda logística a alguno de los bandos en pugna. Es por ello que resulta importante analizar cómo se gestó el genocidio, qué intereses fueron puestos en juego en la región y qué rol desempeñó la comunidad internacional.

Orígenes del conflicto

Los autores¹ que han escrito sobre este tema frecuentemente hacen hincapié en que el conflicto estalló por razones de índole étnica, por disputas históricas entre la mayoría hutu y la minoría tutti, generadas a lo largo de la atribulada historia del país.

Originariamente la región estaba habitada por etnias twa (pigmeos). Este pueblo de cazadores y artesanos fue progresivamente desplazado por los hutu (de origen bantú), que pronto fueron la etnia dominante. En el siglo XIV los tutsi (watusi) inmigraron a la zona, procedentes del actual territorio de Somalia. Este último grupo se impuso definitivamente en el siglo XV, con la instauración de una monarquía.

Los primeros contactos con europeos tuvieron lugar hacia 1858, sin una instalación definitiva por parte de éstos últimos. En 1885, la Conferencia de Berlín, en la que se realizó el conocido "reparto" de África, le asignó este territorio al África Oriental Alemana - que también incluía Burundi y Tanzania-. Recién en 1899 quedó organizado el protectorado alemán de Rwanda, manteniendo la estructura social existente.

Después de la Primera Guerra Mundial, el territorio de Rwanda-Burundi pasó a manos de Bélgica, quién lo administró desde el Congo. De los tres grupos que habitaban la región, la minoría guerrera tutsi se consolidó en la dirección del Estado, apoyada por la metrópoli colonizadora y por la Iglesia. Esta última fue un importante factor de penetración, ya que permitió afianzar el poder de los tutsis al expandir la creencia de que eran superiores a los hutus. También ayudó a esto que los colonizadores introdujeran ciertos cambios que tuvieron gran repercusión en la vida cotidiana, como el uso del documento de identidad con pertenencia étnica y la conversión masiva de la población al cristianismo.

En 1959 los agricultores hutu se rebelaron contra la monarquía tutsi y, como consecuencia de las matanzas, éstos emigraron a países vecinos. El poder quedó entonces en manos del Partido del Movimiento de Emancipación Hutu (Parmehutu). Este partido adoptó un modelo económico liberal, pero le permitió a la elite tutti-que no había emigrado- conservar el control de la tierra, el comercio y la banca.

La monarquía fue abolida en 1961 mediante un referéndum. Esto generó una guerra civil que obligó al gobierno colonial a retirarse, declarando la independencia. El Parmehutu ganó las elecciones supervisadas por las Naciones Unidas, y hacia 1962 se proclamó la República, separándose el territorio de su vecino Burundi.

Carente de bases programáticas sólidas, el Parmehutu organizó la sociedad con criterios étnicos: los twas, una verdadera minoría, se ocuparían de las tareas artesanales y los tutsis de la ganadería, la propiedad de la tierra quedaría en manos de los hutus. Se trató de un sistema en que casi no había cabida para el desarrollo urbano. La mayoría de la población vivía del campo, la economía era de autosubsistencia y el comercio muy débil.

Al año siguiente, en 1963, estalló una nueva guerra civil con la invasión de tutsis exiliados. La represión del ejército hutu causó más de 20 mil muertos y la expulsión del país de más de 160 mil tutsis. La masacre tuvo lugar sin testigos mediáticos, a quienes les fue prohibida la entrada.

¹ Ésta es la visión predominante en los medios de comunicación y de muchos políticos occidentales; también se pone de manifiesto en algunos académicos como Kaplan, Mbembe o propio Samuel Huntington cuyo controvertido "choque de civilizaciones" no es más "que un conflicto tribal a gran escala".

A finales de la década del 60 la crisis económica se agravó, por lo cual el gobierno debió incentivar la reintroducción del cultivo de café -cuyas plantaciones habían sido quemadas en las revueltas campesinas de 1959, por considerarlas un resabio del colonialismo-. Así, Rwanda se convirtió en uno de los mayores productores de café. Este cambio produjo una burguesía rural, lo que incentivó aún más las divisiones y resentimientos étnicos, con permanentes rebrotes de violencia.

En 1973 el régimen político se radicalizó, volviéndose más autoritario. Esto generó una nueva oleada migratoria de tutsis. Ante la amenaza de una nueva guerra civil el General Habyarimana, quien hasta ese momento se desempeñaba como Ministro de Defensa, dio en mayo un golpe de Estado. Disolvió el Parmehutu, encarceló al presidente e inició una campaña para restablecer relaciones con los países vecinos, las cuales se habían deteriorado durante el régimen depuesto.

La década de los 80 estuvo signada por constantes crisis económicas. La caída del precio del café y las sequías redundaron en un empeoramiento de las condiciones de vida de la población. En esos años, en Uganda, grupos de exiliados tutsis crearon el Frente Patriótico de Rwanda (FPR).

En 1988 Habyarimana fue reelecto y se renovó la Legislatura. De los diputados elegidos, once fueron mujeres -quienes accedían a cargos legislativos por primera vez- y sólo dos cargos fueron asignados a tutsis. Este hecho abona la tesis del conflicto étnico, ya que se dio lugar a la participación de una minoría sexual, pero no a la de una minoría étnica.

Al año siguiente el FPR, proveniente de Uganda, entró en Rwanda, iniciándose así un período de enfrentamientos que se prolongó hasta 1994. El gobierno sufrió una fractura en cuanto a qué actitud tomar frente a los reclamos del FPR: iniciar el diálogo o enfrentarlos. Los hutus más radicales ganaron la puja. La violencia se incrementó y, simultáneamente, comenzó una campaña propagandística racista a través de la revista Kangura y la radio Mil Colinas.

Aun así, en ese clima tan enrarecido, en 1991 el gobierno se comprometió a emprender un proceso de democratización, como intento de generar las condiciones que permitieran lograr la paz. Para ello se firmó una nueva Constitución en la que se permitía el multipartidismo, se creaba el cargo de Primer Ministro, se limitaba el ejercicio de la presidencia a dos períodos de cinco años y se establecía la separación de los poderes del Estado. También se permitía la libertad de prensa.

Sin embargo, esa "apertura" no se manifestó en actos concretos que cambiaran la situación de la población civil. De hecho, se hablaba de un "Estado Mayor en las sombras" que se encargaba del exterminio secreto de tutsis. El partido oficial, Movimiento Revolucionario Nacional para el Desarrollo (MRND) fue acusado por los partidos opositores -el Movimiento Democrático Republicano (MDR) y el Partido Liberal (PL)- de ser el responsable de las masacres.

En 1993 el gobierno y el FPR firmaron una serie de acuerdos de paz en Arusha. Esos acuerdos preveían la instalación de un gobierno de transición en donde estarían representados el FPR y la oposición política. Para garantizar esto la ONU envió una misión de paz (MINUAR) que reemplazó a las fuerzas francesas que se encontraban en el territorio desde 1990. Los sectores más radicalizados del régimen se opusieron y los acuerdos no se cumplieron. Por el contrario, la situación se volvió cada vez más volátil. La ONU recomendó a la MINUAR no intervenir, aún ante la denuncia concreta de que el gobierno se estaba armando.

La situación hizo eclosión el 6 de abril de 1994 cuando un misil, del cual hasta el día de hoy no se conoce el origen -aunque hay varias versiones-, impactó en el avión presidencial, en el cual viajaban desde Arusha los jefes de gobierno de Rwanda y Burundi. Esto dio inicio al genocidio y a la guerra. En el espacio de cien días cerca de 800 mil personas fueron exterminadas por el sólo hecho de ser tutsis, o por la sospecha de que lo fueran. Lo mismo le sucedió a los hutus opositores al régimen político y también a los moderados que se negaron a prestar su concurso en el genocidio. Ante esta situación las potencias occidentales evacuaron a sus compatriotas, pero se negaron a socorrer a los rwandeses. La ONU, en una actitud sorprendente, retiró sus tropas y abandonó la región.

El 16 de mayo de 1994 el Consejo de Seguridad de la ONU emitió la Resolución 917 que autorizaba la presencia en Rwanda de 5.500 Cascos Azules. Nueve días después, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU calificó la situación como genocidio y comenzaron las discusiones sobre la necesidad de enviar una fuerza de paz.

Francia se adelantó y organizó la "Operación Turquesa". Este "apuro" francés puede ser explicado por la inminencia de que el FPR tomara Kigali -hecho que efectivamente ocurrió a principios de julio- y sugiere que el objetivo real de la operación era ocultar evidencia del apoyo francés al régimen hutu.

Con la toma de la capital, se instaló un nuevo gobierno con el FPR a la cabeza, aunque se postulaba el multipartidismo. El nuevo gobierno intentó reactivar la desmantelada economía y organizar la golpeada sociedad. Para ello, la justicia rwandesa comenzó los juicios contra los culpables de la masacre, pero sin recibir la ayuda esperada de los países occidentales. El juzgamiento se hizo, al principio, muy difícil, ya que cuando llegaron los tutsis al poder, los hutus, temiendo represalias, se refugiaron en los países vecinos, yendo ocultos entre ellos los responsables de las matanzas. Este operativo fue planificado por Francia como ayuda humanitaria y como forma de auxiliar a sus antiguos aliados. Estos "refugiados" se instalaron en los países vecinos, en particular en la República Democrática del Congo -en ese momento Zaire- y desde allí siguieron operando. En ese momento hizo su aparición la comunidad internacional, a través de la ayuda humanitaria en los campos de refugiados hutus, y con la presencia de la prensa que registra la "venganza" tutsi.

Como se señalara más arriba, este hecho atroz no puede ser explicado solamente como un conflicto étnico. Máxime, si se tiene en cuenta que durante el período independiente se permitía el casamiento mixto y éste era practicado frecuentemente. El argumento étnico no alcanza para explicar por qué civiles masacraron a sus familiares, vecinos o amigos. No alcanza para justificar una de las peores masacres del siglo pasado.

Es necesario, entonces, preguntarse de dónde vinieron los fondos que permitieron la masacre. Cómo fue que las políticas impuestas por los organismos internacionales aceleraron el proceso que condujo al genocidio. Es relevante, asimismo, analizar la presencia en la región de los diferentes países occidentales y el rol de los organismos de financiación internacional.

Los acreedores del genocidio

La relación entre Bélgica y Rwanda, como ya se mencionó, data del período colonial y se prolongó durante el independiente en forma de asesoramiento y ayuda. Con Francia, en cambio, se fue construyendo sobre la base de la ampliación de la zona francófona. Esto se evidenció en un apoyo sistemático y concreto de Francia al régimen hutu de Habyarimana -acuerdos de cooperación militar, suministro de armas y apoyo logístico-. Esa colaboración

fue más contundente a partir de la aparición, en 1986, del FPR. Éste, formado por tutsis en el exilio ugandés, tenía como lengua común el inglés. De manera que el conflicto analizado se podría encuadrar también en la disputa por mantener zonas de dominación francófonas o anglófonas. La misma no fue directa, sino que se manifestó en forma de préstamos, políticas económicas y venta de armamentos.

El régimen dictatorial de Kayibanda, depuesto por el golpe de Estado de 1973, era el garante del bloqueo a toda política de cambios estructurales. Por tal razón era sostenido por Bélgica, Francia y Suiza; y de hecho casi no existía la deuda externa. Con el cambio de gobierno esa situación se revirtió. Entre 1976 y 1994 la deuda externa de Rwanda se multiplicó por veinte (BM, GDF; 2001).

Entre finales de los `80 y el año 1994 el gobierno de Habyarimana recibió numerosos préstamos que debían servir para insertar la economía rwandesa en la economía mundial. Para alcanzar ese objetivo el régimen se apropió de una parte considerable de tales préstamos para repartir entre sus "aliados internos". Los créditos iban dirigidos a desarrollar la producción de café, té y estaño para la exportación, en detrimento de los cultivos destinados a satisfacer las necesidades locales de alimentos. Este modelo funcionó hasta mediados de la década de los 80, cuando cayeron los precios del estaño, primero, y luego los del café y del té.

Tal situación generó una crisis económica y la necesidad de buscar nuevos préstamos. Pero estos vendrían acompañados de propuestas concretas de desarrollo. Así en octubre de 1990 en Washington, Rwanda firmó acuerdos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que implícitamente contemplaban la ejecución de Planes de Ajuste Estructural (PAE) para sortear los diversos apremios del país.

Los PAE preveían una disminución del gasto público a través del congelamiento de salarios y el despido de empleados públicos, no obstante lo cual se transfirieron una gran parte de los gastos al Ejército (Toussaint, 2004:2).

El nivel de vida de la población cayó estrepitosamente debido a que cuando el PAE se comenzó a aplicar hubo una devaluación de la moneda local -el franco rwandés- que elevó el precio de los productos de consumo. Paralelamente, la balanza de pagos se vio afectada, ante lo que el FMI activó nuevas líneas de crédito para la compra de productos importados. El producto de la venta de estos bienes importados en el mercado local -que habían subido escandalosamente de precio- le permitió al Estado pagar los sueldos de los militares.

Aunque los precios de los productos importados subieron, los precios de compra del café a los productores se congelaron, tal como lo pedía el FMI. La consecuencia directa de esto fue la ruina de miles de pequeños productores de café; la indirecta fue que éstos, junto a las capas más empobrecidas de los pueblos, constituyeron una reserva permanente de reclutamiento para las milicias y el ejército.

Para justificar el uso de esos préstamos, Rwanda fue autorizada por el BM a presentar viejas facturas que justificaran la compra de bienes importados (Toussaint, 2004). Este sistema permitió a las autoridades rwandesas financiar la compra masiva de armas que luego fueron utilizadas en el genocidio. Así, los gastos militares se triplicaron entre 1990 y 1992.

El BM entonces amenazó con cortar el flujo de préstamos si no cesaba la compra de armas. En consecuencia el gobierno debió "disimular" de alguna forma los gastos militares: los camiones comprados para el ejército fueron imputados al presupuesto del

Ministerio de Transporte; una parte importante del combustible utilizado por las milicias y el ejército fue imputada al Ministerio de Salud (Chossudovsky et Galand, 1996).

Esta situación se mantuvo hasta 1993, cuando los organismos internacionales cortaron el flujo de dinero pero no denunciaron la existencia de cuentas bancarias que las autoridades rwandesas poseían en el extranjero -y de las que grandes sumas quedaban disponibles para la compra de armas-.

Según Toussaint, estos organismos faltaron a su deber al seguir enviando dinero aún cuando sabían que con él se compraban armas. Así incumplieron con su deber al no controlar qué uso se le daba al dinero que prestaban. Permitieron abierta y directamente la preparación del genocidio.

Para que el proyecto genocida cuajara no alcanzaba con que fuera concebido, planificado y dotado de instrumentos para su ejecución. Se precisaba además de una masa empobrecida, lumpenizada, preparada y lista para realizarlo. Rwanda es un país donde el 90% de la población vive en el campo y, de ésta, el 20% dispone de menos de una hectárea para su subsistencia. Según Maton, entre 1982 y 1994 la mayoría de la población se empobreció, mientras que un pequeño grupo se enriqueció como nunca antes.

Los "cómplices" del silencio

Llegado a este punto cabe preguntarse quién se benefició con la venta de armas, y qué países fueron los que proveyeron al régimen. Los principales proveedores fueron entre 1990 y 1994 Francia, Bélgica, Sudáfrica, Egipto y la Republica Popular China. Esta última los proveyó de machetes; en cambio Egipto -a través de su viceministro de Asuntos Extranjeros, Boutros Gali- le ofreció un crédito sin interés al gobierno para la compra de armas de infantería.

Esta situación no terminó con el embargo de armas que decretó la ONU el 11 de mayo de 1994, por el contrario, Francia y Gran Bretaña continuaron vendiendo armas y- en especial la primera- aportando ayuda financiera y logística -por ejemplo posibilitar que en Goma se instalara una sede del Banco Nacional de Rwanda y desde allí se compraran armas- para que, desde el exilio, el régimen hutu continuara con la lucha.

Rwanda hoy

Una vez instalado el régimen tutsi en el poder, el BM y el FMI exigieron que se cumplieran las metas acordadas en el momento de realizarse los préstamos, como por ejemplo reducir el número de funcionarios. Las nuevas autoridades, incomprensiblemente, aceptaron, y con ello legitimaron la deuda externa. Es lo que algunos autores califican como deuda "odiosa".

En consecuencia, los préstamos que se consiguieron a partir de 1994, y que no llegaban a los volúmenes del período previo, apenas sirvieron para pagar la deuda. Esto llevó a que el proceso de recuperación fuese demasiado lento. Según un documento de Woodward realizado en 1996, la situación agrícola estaba un 38% por debajo de la cifra habitual de las cosechas; en el sector industrial sólo 54 de las 88 empresas existentes antes del genocidio reabrieron sus puertas, sumado a que comenzaron a producir mucho menos. Se generó entonces un círculo vicioso en donde se produce menos, los salarios bajan y el consumo se restringe. Por ello, no asombra que en la actualidad la actividad más lucrativa sea trabajar en alguna ONG instalada en el país después de julio de 1994.

La masacre trajo aparejados además diversos cambios sociales. Ha crecido la cifra de mujeres cabeza de familia y la de huérfanos -se calcula que existen entre 95 mil y 150 mil niños sin familia- muchos de los cuales deben hacerse cargo de sus hermanos menores. El gobierno, ahora sí asistido por la comunidad internacional, posee planes para ayudar a estos sectores incentivando la adopción, la educación- en especial la primaria- y la salud. Este punto es fundamental, ya que durante la masacre se practicaron violaciones sistemáticas como medio de limpieza étnica. Esto no sólo dejó como secuela los traumas psicológicos sino el HIV/SIDA. En Rwanda, según un informe oficial, la tasa de seropositivos es del 11%, llegando al 20% en la franja de 18 a 35 años (Goujon, 2002).

Un ejercicio de la memoria

¿Cómo se “sale” de tanto horror? Indudablemente manteniendo vivo lo que sucedió, recordando y tratando de reconstruir las relaciones sociales. Esta no es una tarea fácil. Ha llevado a una ardua discusión dentro de la sociedad rwandesa con relación a si no es mejor olvidar el pasado y continuar “hacia adelante”. Sin embargo, antes de transformarse en un asunto del pasado, la realidad golpea día a día a los rwandeses. Las secuelas son muchas y aún no se ha logrado restablecer el entramado social. El primer aniversario del genocidio no sólo fue conmemorado dentro en un clima conflictivo pues la agitación social seguía, sino que se planteó un debate sobre cuál sería la fecha para el recordatorio: el 6 de abril, fecha del comienzo de los asesinatos y también de la muerte del presidente Habyarimana; o el 4 de julio, fecha oficial de culminación del genocidio. Este debate, en realidad, manifestaba el temor de asociar a hutus y tutsis en el recuerdo. Al elegirse el 7 de abril como fecha de conmemoración se incluía a ambos grupos. Asimismo, poseía un trasfondo político, pues en el gobierno existían funcionarios de ambas etnias (Kagabo, 2004).

Al año siguiente, en 1995, apuntando a la justicia y la reconciliación, se reunió en Kigali la Primera Conferencia Internacional sobre el Genocidio, reconociendo finalmente la comunidad internacional la tragedia rwandesa. Ese mismo año se constituyó el Tribunal Penal Internacional para Rwanda que funciona en Arusha. Pese a su lento procedimiento, las primeras sentencias están viendo la luz. Allí no sólo se juzga a los autores directos de los hechos, sino también a los instigadores, a los autores intelectuales. Tal es el caso de las autoridades de la radio Mil Colinas (AI, 2003).

La justicia nacional rwandesa inició también el juzgamiento de los autores directos, de quienes realizaron efectivamente las matanzas. Esto ha generado un hacinamiento de sospechosos en las cárceles -Amnistía Internacional calcula alrededor de 100 mil detenidos para 2003 y el número se incrementa día a día- muchos de los cuales fallecen antes de ser juzgados por las malas condiciones de vida, o, en el mejor de los casos, son declarados inocentes, pero después de varios años de encierro.

A partir del 2001 el gobierno ha propiciado la utilización del sistema tradicional de justicia, la gacaca, para juzgar a personas de menor rango, de modo que pueda favorecerse su reinserción en la sociedad.

Todos estos esfuerzos que el gobierno y en particular la población rwandesa están haciendo, serán vanos si la comunidad internacional no asume su parte en esta catástrofe humanitaria. A partir de ahí la reconciliación y la reconstrucción serán algo posible.

Bibliografía:

Amnistía Internacional: "Rwanda: Gacaca - a question of justice", AI: AFR 47/007/2002.

Braekman, Collete: "A diez años de un genocidio anunciado", *Le Monde Diplomatique*, año V, número 57, marzo 2004.

CHOSSUDOVSKY, Michel et GALAND Pierre, "Le Génocide de 1994, L'usage de la dette extérieure du Rwanda (1990-1994). La responsabilité des bailleurs de fonds", Ottawa et Bruxelles, 1996, <http://globalresearch.ca/articles/CHO403F.html>

Claudine Vidal: "Ruanda: Esperanza engañosa", *Le Nouvel Observateur*, en *Rebelión*, 26 de junio del 2003. <http://www.rebellion.org/africa/030626ruanda.htm>

Eduardo González: "El Gobierno de Clinton estaba suficientemente informado sobre lo que sucedía en Ruanda antes de que se produjera el genocidio", *Rebelión*, 2 de abril del 2004. <http://www.rebellion.org/africa/040402ruanda.htm>

Emmanuel Goujon: "Las heridas abiertas del genocidio en Ruanda", *El Corresponsal de Medio Oriente y África*, 12 de junio de 2004. http://www.elcorresponsal.com/modules.php?name=ElCorresponsal_Articulos&file=articulo&req_sectionid=2&req_articleid=526

Francisco Rey Marcos: "Décimo aniversario del genocidio en Ruanda: La comunidad internacional fue cómplice", *Rebelión*, 7 de abril del 2004. <http://www.rebellion.org/africa/040407frey.htm>

Julio Godoy: "Ruanda, diez años. Francia aún niega su responsabilidad en el genocidio", *La insignia*, 8 de abril del 2004. http://www.lainsignia.org/2004/abril/int_017.htm

Kagabo, José: "El sentido de una conmemoración", *Le Monde Diplomatique*, año V, número 57, marzo 2004.

Kofi Annan: *Mensaje en el décimo aniversario del genocidio en Ruanda*, Centro de Información de las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay, Abril de 2004.

Laura Ramos: "Deuda odiosa. Caído el déspota, caída la deuda", *Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG)-Universidad Politécnica de Cataluña*, enero 2004. http://www.observatoriodeuda.org/cast/docs/boletin/b13_deuda_odiosa.pdf

MAE: Ruanda, Mayo 2004. <http://www.mae.es/documento/0/000/000/612/Ruanda.pdf>

Maton, Jef.: *Développement économique et social au Rwanda entre 1980 et 1993. Le dixième décile en face de l'apocalypse*, Université de Gand, Faculté de Sciences économiques, 1994.

Toussaint, Eric: "Nouvelles révélations sur les ventes d'armes", *CADTM 19*, Bruxelles, 1996.

Toussaint, Eric: "Rwanda : Les créanciers du génocide", in *Politique*, *La Revue*, Paris, avril 1997.

Toussaint, Eric: "A diez años del genocidio. Ruanda: los acreedores del genocidio", 19 de abril del 2004. http://www.observatoriodeuda.org/cast/docs/boletin/b15_ruanda_toussa int.pdf

Woodward, David: *The IMF, the World Bank and Economic Policy in Rwanda: Economic, Social and Political Implications*, Oxfam, Oxford, 1996.

Departamento de Africa

Aporte Especial

¿Es posible la paz en Sudán?

Por **Maria José Becerra**

Sudán es uno de los países más extensos de África y cuenta con abundantes recursos naturales. Sin embargo, debido a conflictos que se vienen desarrollando desde hace casi medio siglo, hoy es un territorio devastado y atraviesa una de las crisis humanitarias más graves del mundo.

Desde su independencia de la dominación británica y egipcia, en 1956, la República de Sudán se encuentra inmersa en una guerra civil cuya complejidad -que entrecruza elementos étnicos, religiosos, culturales y económicos- dificulta su resolución. En abril de 2004 se firmó un acuerdo de paz entre las dos zonas que históricamente se enfrentaron: el norte, económicamente más desarrollado, con el 65% de la población total y con un elevado predominio de musulmanes; y el sur, más fértil, con abundancia de agua y petróleo, y con una mayor diversidad étnica y religiosa, donde predominan el cristianismo y las religiones tradicionales.

Este largo y arduo proceso de paz, que se inició en 2002, se ve hoy amenazado por otra crisis, la de la región del Darfur. En la zona oeste del país, en su frontera con Chad, estalló en enero de 2003 una guerra civil con características de limpieza étnica. Esta se dio entre grupos musulmanes, cercanos al gobierno central, y etnias nativas; y su virulencia -según las Naciones Unidas- la ha transformado, en poco tiempo, en la crisis humanitaria más grande del mundo.

El presente artículo analiza diferentes intereses, tanto internos como externos, que obstaculizan un acuerdo de paz duradero, donde se reconozca un Estado pluriétnico y multireligioso. Para ello, se estudia la situación de Sudán desde su independencia hasta la firma de los protocolos de abril de 2004, centrando la atención en los diferentes momentos del proceso de paz. Asimismo, se intenta describir la situación en la región del Darfur y sus implicancias para dicho proceso.

Antecedentes históricos

Sudán estuvo bajo la protección colonial de Gran Bretaña y de Egipto desde 1899 hasta 1953, cuando se firmó en Jartum un acuerdo que garantizaba su total independencia en un plazo de tres años. Sin embargo, ese plazo no llegó a cumplirse: en 1955 el gobierno de transición recibió fuertes presiones de los grupos islamistas radicales y en 1956 estalló la primera guerra entre el norte y el sur del país. John de Garang creó el Ejército Popular de Liberación de Sudán (EPLS) y organizó la resistencia del sur en contra del gobierno central de Jartum. Esto desencadenó un conflicto sangriento.

En 1958 el primer golpe de Estado situó en el poder al presidente Abboud, quien fue depuesto en 1964, con otro golpe de Estado. Se creó así un clima de inestabilidad en todo el país. Cinco años después, aprovechando esa situación, se constituyó en el sur un gobierno rebelde presidido por Garang, lo que reactivó la guerra civil causando la muerte

a miles de personas. En 1972, en Addis Abeba, se firmó entre las partes en conflicto un acuerdo de paz. El mismo establecía, además del alto el fuego, el derecho a la autodeterminación del sur, y llevó una relativa paz a la región durante casi once años.

Hacia 1980, el gobierno democrático de Nimeiri entró en crisis. Se vio debilitado por problemas económicos, que se agravaron con el aumento del precio del crudo por parte de la OPEP; y por las presiones del partido islámico radical Frente Islámico Nacional (FIN, liderado por Hassan el-Turabi). La situación fue aprovechada por el sur para reivindicar la división de esta región en tres zonas. La reacción del norte no se hizo esperar y el acuerdo de autonomía del sur de 1972 fue derogado. En 1983, el General Omar al-Bachir, presidente de Sudán del norte, proclamó en todo el territorio las crueles "leyes de septiembre" que preveían castigos draconianos ante cualquier falta -como la amputación de miembros por robo-, lo que provocó un rebrote de la guerra civil. Esta segunda etapa del conflicto fue más violenta y mortífera que la primera, debido a la utilización de armamento sofisticado, al uso de grupos paramilitares y a la manipulación de la ayuda humanitaria y los alimentos por parte del gobierno. La situación se agravó aun más en 1989, cuando otro golpe de estado llevó al poder a un régimen revolucionario islámico en el norte. Este, hacia 1991, planteó la *sharia*, la ley islámica; adquiriendo el conflicto a partir de allí una complejidad tal que lo llevó a prolongarse progresivamente en el tiempo.

Esta guerra implicó tanto la lucha por la posesión de los recursos naturales (como el agua, el petróleo y la tierra cultivable); como los conflictos étnicos y la guerra religiosa. Aunque con defecciones en ambos bandos, la situación se mantuvo, ya que las variaciones no fueron suficientemente profundas para llegar a un cese de las hostilidades. En este sentido, vale aclarar que la perduración de esta guerra civil no sólo obedeció a la complejidad de los intereses en juego sino también a las motivaciones de los actores regionales e internacionales en la zona.

Proceso de paz

En los últimos veinte años el conflicto en Sudán se ha cobrado dos millones de vidas, cuatro millones de personas fueron obligadas a desplazarse dentro del país y 570 mil se refugiaron en los países vecinos, además de las grandes pérdidas económicas sufridas a partir del mismo. Varios países, por diferentes motivos, alimentaron este conflicto que hizo del Sudán uno de los países más pobres del mundo, aunque en el sur de su territorio posea yacimientos de petróleo en cantidades suficientes para convertir al país en un importante exportador de crudo.

El proceso de paz fue arduo y en él intervinieron no sólo el Gobierno Central y el EPLS, sino también importantes países de la región y del mundo. Para entender acabadamente este proceso, es necesario comprender la importancia estratégica de Sudán.

El conflicto sumió a la región en una situación "volátil" donde se vieron inmersas Uganda, Eritrea y Etiopía. El gobierno de Sudán apoyó las guerrillas de Eritrea y Etiopía para impedir la posibilidad de una Etiopía cristiana que actuara como tapón de la expansión islámica, sustituyéndola por un archipiélago de Estados islámicos. A su vez, y esgrimando el mismo argumento religioso, los gobiernos de esos dos países y el ugandés apoyaron al ELPS.

Egipto e Israel, aunque por razones diferentes, también estuvieron muy interesados en este conflicto. Egipto fue históricamente dependiente del Sudán en cuanto a recursos hídricos: el agua del Nilo llega a Egipto después de atravesar por el Nilo Blanco y el Nilo

Azul en territorio sudanés, de manera que cualquier enemistad entre Sudan y Egipto podría poner en peligro la vida agrícola y el desarrollo de este país. Por tal razón, al gobierno egipcio- aliado de Estados Unidos en la región- le ha convenido un Sudán unido. En contrapartida, Israel, en distintos periodos, suministró armas a ambos bandos en pugna para que el conflicto se mantuviera y, de esta manera, afectar los intereses de Egipto.

Las potencias occidentales, por su parte, tampoco estuvieron ajenas a esta guerra civil. Su silencio cómplice extendido por tanto tiempo sólo puede ser entendido cuando se analiza el apoyo político, militar y logístico prestado a alguno de los dos bandos enfrentados. Por un lado, la derecha norteamericana y el Vaticano apoyaron al EPLS; mientras que por su parte la República Popular China, en cooperación con Irán, le suministró armas al Gobierno Central a cambio de petróleo y productos alimenticios. Francia, Alemania, China, Canadá y Estados Unidos mantuvieron relaciones comerciales con el gobierno sudanés, proveyéndolo así de divisas frescas para mantener la guerra a cambio de crudo. También la Liga Árabe jugó un importante papel en apoyo del régimen.

Todos estos actores -salvo, quizás, el Vaticano y la Liga Árabe- persiguieron intereses económicos basados en la riqueza petrolera del sur. En el caso de Estados Unidos, a partir del 11 de septiembre de 2001, se sumó un nuevo interés: la lucha contra el terrorismo como fundamento ideológico legitimante de su política imperialista.

Sudán es uno de los países que más ha apoyado al terrorismo islámico, y de triunfar el norte se generaría un polo islámico de poder en la región. Por eso es que la ayuda norteamericana al sur y la presión sobre el norte se acrecentaron sustancialmente, al punto de llegar a ser el patrocinador de las conversaciones de paz.

Tras el 11 de septiembre el gobierno de Estados Unidos comenzó una mediación en el conflicto sudanés que condujo a la declaración de una tregua por seis meses en la región de los montes de Nubia, Sudán Central, en enero de 2002 y a un acuerdo de libre tránsito de la ayuda humanitaria. Además, se creó una Misión Conjunta de Supervisión para verificar el cumplimiento de los acuerdos. Este alto el fuego se renovó por otros seis meses en junio de 2002 y en diciembre de ese año se pactó una nueva prórroga. Simultáneamente a esto, Estados Unidos patrocinó conjuntamente con la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, organismo regional que agrupa a Sudán, Etiopía, Kenya, Uganda, Eritrea, Djibuti y Somalia) una serie de conversaciones de paz entre las partes en conflicto en Machakos, a 80 Km de la capital de Kenya.

En julio de 2002 se iniciaron las conversaciones de paz entre el Gobierno y el EPLS que terminaron con la firma de un protocolo de acuerdo el 20 de julio. En Machakos I, como se lo conoce, se estableció un alto el fuego, sumado al compromiso de negociar una nueva organización política en todo el Sudán y la realización de un referéndum de autodeterminación para el sur. El acuerdo supuso un periodo de transición de seis años, durante el cual el sur contaría con un Estatuto Autónomo y la *sharia* no sería aplicada en esta zona. Terminado el periodo de transición, el referéndum determinaría si el sur seguiría formando parte del país o se separaría del resto. A este acuerdo siguieron la Ley por la Paz, Machakos II y Machakos III. Machakos II, firmado el 16 de octubre de 2002, puso fin a las hostilidades y permitió el ingreso de la ayuda humanitaria. En Machakos III, firmado el 18 de noviembre de 2002, se pactó un reparto de las riquezas del país. Pero estos acuerdos no fueron definitivos. Durante todo 2003 las delegaciones de ambas partes se reunieron para llegar a un acuerdo definitivo que fuera más allá del declarado referéndum de Machakos I. Sin embargo, sólo se logró firmar un acuerdo de reparto de las riquezas petrolíferas del sur entre ambas partes, recién en enero de 2004.

Aunque no fue un año fructífero en cuanto a los acuerdos alcanzados, en agosto de 2003 el Presidente al-Bachir, en un claro gesto frente a los países mediadores, levantó la prohibición a los partidos políticos que él mismo había impuesto cuando llegó al poder a través de un golpe de Estado. La medida incluyó ciertas restricciones: los partidos que habían tenido participación en el Parlamento antes de 1989 y que renegaran del uso de la fuerza serían legalizados inmediatamente, mientras que los demás deberían cumplir con otros requisitos como, por ejemplo, poseer sede en Sudán, cumplir con las leyes y la Constitución, etc. Así, en vez de distender la situación, lo que esta medida hizo fue unir a los dos principales grupos de oposición, el Partido Umma y el Partido de la Unión Democrática en su rechazo al gobierno.

Tras una creciente presión de la comunidad internacional ambos bandos se reunieron en abril de 2004 y firmaron una serie de acuerdos que pretendían despejar los últimos obstáculos para poner fin a las dos décadas de guerra civil. En la ciudad keniana de Naivasha se reunieron el vicepresidente sudanés, Ali Osman Mahanumed Taha, y el líder del EPLS, John Garang, a los fines de rubricar tres protocolos diferentes. El primero trata sobre las fórmulas para compartir el poder político y los otros dos tratan del estatus y administración de las tres regiones en disputa en el centro del país: las montañas Nuba, el Nilo Azul meridional y Abyei. Para finales de julio de este año se prevé esté listo el acuerdo global definitivo que incluya los detalles y aspectos técnicos de todo lo pactado entre 2002 y 2004. Esta tarea estará a cargo de abogados y expertos, quienes, además, deberán redactar un alto el fuego definitivo, cuyo cumplimiento efectivo será supervisado por la comunidad internacional.

No obstante, más allá de tales tentativas, la disputa entre el norte y el sur no podrá ser solucionada mientras no se ponga fin a otra guerra que, desde hace años, se viene librando en el oeste del país y que ha sido extrañamente "olvidada" por todos: la crisis del Darfur

La situación en el Darfur

La guerra civil entre el norte y el sur del Sudán ocultó o, mejor dicho, puso en un segundo plano, otra guerra que es, quizás, igualmente violenta y cruel. En febrero de 2003 estalló una rebelión en el Darfur, región situada al oeste de Sudan, que rápidamente adquirió características de limpieza étnica, y que recién cuando se llegó a los acuerdos finales de paz por el conflicto norte-sur fue tenida en cuenta por la comunidad internacional. En poco más de un año y medio los conflictos tribales que desde hace veinte años caracterizan la actualidad del Darfur, se transformaron en una guerra civil mortífera.

Darfur toma su nombre de la etnia fur, pueblo campesino que vive en el macizo montañoso del jabal Marra, en el centro del país. Este grupo dominaba un reino independiente hasta que en 1916 fue incorporado a Sudán. Se transformó así en una provincia a su vez dividida en tres Estados: Darfur del norte, del sur y del oeste. La mitad norte de esta región es sahariana, recorrida por nómades camelleros; la zona central y sur, más fértil, está habitada por grupos pastoriles y población campesina. Toda la provincia posee gran cantidad de grupos étnicos, mayoritariamente musulmanes, pero el árabe sólo es la lengua materna de una minoría de sus habitantes. Se tiene, así, a las "tribus árabes" (llamadas así por sus adversarios) que son nómades y camelleras; y las "tribus africanas", que se dedican al pastoreo y a la agricultura. Esto generó conflictos desde siempre por la posesión de los pastos y el agua, lo que finalmente hizo eclosión en

1980, junto con un aumento demográfico y una coyuntura de gran sequía. Desde entonces Darfur está en crisis, y su situación se deteriora año tras año.

Entre 1985 y 1988 una guerra enfrentó a los furs con los grupos árabes. La intervención de la Legión Islámica Libia y del Partido Umma hizo que los árabes rizeygats del sur lograran el reconocimiento de un "dar" (país) para ellos en la región de Ed-Duein. La paz se logró pero en un marco de gran inestabilidad, la cual se agravó cuando, en 1989, asumió el régimen militar islámico, apoyado en estos grupos, particularmente los más belicosos.

En la década del 90 hubo varias guerras locales: en 1990 entre los furs, apoyados por el EPLS, y el Ejército, conjuntamente con los árabes benis halbas; en 1996, entre rizeygats y zaghawas; entre 1997-99 en el oeste, entre campesinos masalits y árabes um julluts. Por lo general las hostilidades fueron iniciadas por los árabes, mediante sus feroces milicias: los *janjawid* (significa los jinetes del diablo armados con kalachnicov). A partir de 2001 los ataques se incrementaron, principalmente a las comunidades masalits y furs.

El 25 de febrero estalló la insurrección en el Darfur con el levantamiento del Frente de Liberación del Darfur (FLD) en el jabal Marra. A diferencia de las anteriores rebeliones, esta unió a todas las "tribus negras". Fundado poco más de un año antes, en marzo de 2003, el FLD cambió su denominación para incluir a todos los grupos de la región, pasando a llamarse Ejército de Liberación de Sudan (ALS, en inglés).

Rápidamente los rebeldes se apoderaron de varias localidades, y asentaron su cuartel general cerca de la frontera con Chad, sede del principal sultanado zaghawa. El presidente al-Bachir reaccionó trasladando tropas del sur del país a la región e intentando cerrar las fronteras con Chad y Libia para impedir el apoyo exterior a los insurgentes. Esas medidas no fueron suficientes, puesto que el 25 de abril de 2003 el ALS tomó la capital de Darfur del norte, el-Fasher, y controló su aeropuerto.

El Gobierno Central reaccionó con violencia, encarcelando a intelectuales y sospechosos de simpatizar con los rebeldes. Creó un Comité de Crisis, presidido por un enviado directo de Jartum, quién enroló oficialmente al ejército con las milicias árabes *janjawid* y les dio, además, armas y carta blanca para actuar contra las tribus rebeldes. Esto desató una cruel guerra con masacres a civiles, violaciones a mujeres y niñas, y venta de personas como esclavos.

A mediados de 2003, a instancias del presidente de Chad, se reunieron secretamente el Gobierno Central y el ALS. De esa mediación resultó, el 3 de septiembre, la firma de un alto el fuego en la ciudad de Abeche (Chad), aunque duraría poco tiempo.

En Darfur existe otro grupo rebelde, el Movimiento para la Justicia y la Igualdad (MJE). El jefe de este grupo es de origen zaghawa y fue miembro del grupo islámico FIN de el-Turabi. El MJE rompió con el gobierno central en 1999 y al año siguiente publicó un libro donde se denunciaba el control sobre el Estado y la política sudanesa de determinados grupos árabes en contra de otros. Pero esto no significó un apoyo al EPLS en el sur del territorio. El MJE no fue invitado a Abeche, acusado de ser una pantalla del partido opositor FIN y de no tener verdadera representación en el lugar.

A pesar del alto el fuego concertado, la guerra continuó cuando los *janjawids* tampoco fueron invitados a la mediación, con lo que el gobierno no reconocía a dos de los actores de esta lucha. El 16 de diciembre, una vez vencido el plazo, se reanudó la guerra en toda la provincia. El gobierno tomó la ofensiva recuperando puestos en manos de los rebeldes,

además de asesinar al jefe militar del ALS. Esta situación hizo que se diera una migración importante hacia el Chad.

El 19 de febrero de 2004 el gobierno declaró el fin de las operaciones militares, proclamando así su victoria. No obstante esto, la realidad continúa siendo muy distinta y la masacre de civiles se extiende hasta hoy. La posibilidad de un fin a la guerra en Darfur estuvo, y continúa estando, opacada por el otro gran conflicto, el del sur con el norte. Las negociaciones son llevadas adelante por el Gobierno central y el EPLS, como uno de los miembros de la Alianza Nacional Democrática (AND). Este es un grupo de oposición al gobierno de Jartum, que reúne diferentes movimientos, y cuyo pacto fundador se basa en el derecho a la libre determinación del sur, a cambio de reivindicar las aspiraciones democráticas del norte. El 13 de febrero el ALS pasó a formar parte del AND, confiriéndole así a la rebelión del oeste la legitimidad de una causa nacional.

Pese a ello, el gobierno sigue negociando separadamente los dos problemas, aunque uno condiciona al otro. Mientras que el 8 de abril en Njamena, capital de Chad, consiguió un alto el fuego con el ALS y el MJE por cuarenta y cinco días; a finales de ese mismo mes, en Naivasha, Kenya, firmó un acuerdo con el EPLS.

La situación hoy

No es posible dar un cierre a un complejo abanico de procesos que permanecen en constante redefinición. Es por ello que, para terminar, se detalla a continuación la situación en los últimos tres meses y las perspectivas que se plantean.

Se prevé que para finales de julio estaría listo el acuerdo global final entre el norte y el sur. Con ello concluiría un proceso de paz que ya lleva dos años y que le permitiría a Estados Unidos frenar el avance islámico en la región. Los puntos más destacados de este proceso de paz son los referidos al referéndum que se haría en el sur dentro de seis años para determinar su derecho a separarse del norte de Sudan, y el reparto de las riquezas naturales.

Aunque este acuerdo traería paz a una zona duramente castigada por más de veinte años de guerra civil, muchos países no están de acuerdo con la resolución dada al conflicto. Por ejemplo, Egipto y la Unión Africana se oponen a modificar las fronteras que fueron demarcadas con la independencia. Asimismo, Francia tampoco está de acuerdo y apoya esta posición.

Por otro lado, recién a partir de comienzos de 2004 la ONU y los Estados Unidos comenzaron a prestar atención a la crisis humanitaria en el Darfur que, desde su inicio, hace ya más de un año y medio, causó miles de muertes, violación sistemática de mujeres y niñas, esclavitud; y que obligó a un millón de personas a abandonar sus hogares y a 150 mil a refugiarse en el vecino Chad.

En una visita que realizaron a Sudan el pasado 30 de junio, tanto el Secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, como el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, le pidieron al gobierno de Jartum que ponga fin a esta crisis, pero se negaron contundentemente a catalogar la situación como de genocidio o limpieza étnica. Esta presión llevó a que el 3 de julio, el Gobierno de Jartum junto con la ONU firmaran un acuerdo en donde el primero se comprometía a desarmar a las milicias janjawid, mientras que la segunda se encargaría de formar una Comisión de Investigación. Ninguna de estos dos compromisos se ha cumplido aún.

Las Naciones Unidas no sólo están interesadas en el problema del Darfur, sino que Kofi Annan visitó Kenya, el 8 de julio, para interiorizarse con la marcha del proceso de paz. Allí fue informado por el Ministro del Exterior de ese país de que las conversaciones estaban en su fase final, pero que habían sido afectadas por la crisis del oeste de Sudán.

Mientras tanto la situación sigue igual en el Darfur. Amnistía Internacional hizo un llamado el 16 de julio a la comunidad internacional para que actúe con rapidez y, a su vez, apoyó la mediación de la Unión Africana (UA) en Addis Abeba. En esa ciudad se reunieron ese mismo día representantes del gobierno y de las fuerzas rebeldes, pero fracasaron a poco de comenzar –al día siguiente, el 17- pues los insurrectos solicitaron la desactivación inmediata, por parte del Gobierno, de las milicias *janjawid*.

Ante el estancamiento de las negociaciones, las presiones de Washington y de la ONU han aumentado, llegando a sugerirse que el Consejo de Seguridad debe actuar y enviar fuerzas de paz. Mientras tanto, Sudan, la UA, la Organización de la Conferencia Islámica y la Liga Árabe se oponen y sostienen que el conflicto debe solucionarse dentro del ámbito de la Unión Africana y que una resolución en contrario del Consejo de Seguridad de la ONU sería contraproducente ya que “calentaría” más la región con la presencia de tropas armadas, aunque fueran de paz.

Finalmente la Resolución del Consejo de Seguridad fue aprobada el 30 de julio. Por ella se le impone al gobierno de Sudán un plazo de 30 días para detener la violencia en Darfur, debiendo en caso contrario enfrentarse a sanciones internacionales.

El gobierno de Sudán aceptó la resolución pero dejó en claro su inconformidad con el documento, que fue presentado por los Estados Unidos y aprobado por trece votos a favor y las abstenciones de China y Pakistán, puesto que este carece de equilibrio y ha enviado un mensaje erróneo a los grupos rebeldes. Aún así, el 9 de agosto se firmó un acuerdo entre el gobierno y las Naciones Unidas para desarmar a las milicias *janjawid*. El primero se comprometió a reforzar –y de hecho lo hizo al día siguiente- la cantidad de policías apostados en la región. Las Naciones Unidas, en tanto, reforzaron la ayuda humanitaria, en particular la llegada de alimentos y medicamentos a la población.

Por su parte la UA, intenta buscar una salida “africana” al conflicto. Ante el fracaso de las conversaciones en Addis Abeba, su presidente convoca a otra reunión entre las partes en Abuja, capital de Nigeria, para el próximo 23 de agosto. Esta propuesta es apoyada por Francia y Alemania, para evitar la prolongación del conflicto armado y humanitario. La UE se expresó en este mismo sentido.

En resumen, nos encontramos con una situación que se “recalentó” demasiado. Los actores internos, apoyados por diferentes países o grupos, hacen que la masacre humanitaria y económica se prolongue para obtener así mayores beneficios; mientras tanto, la comunidad internacional “discute” si se está cometiendo genocidio o si sólo son matanzas lentas y silenciosas en gran escala. Esta distinción sutil no es banal en la Alta Política. De ser catalogada la situación como genocidio, según la ONU, las potencias estarían obligadas a intervenir. Por eso se tiene mucho cuidado de usar este término.

Actualmente, el gobierno de Estados Unidos la ha definido como genocidio. Esto fue hecho por unanimidad del Congreso, con lo cual el presidente Bush tendría carta blanca para actuar. Al presidente norteamericano le vendría muy bien de cara a las elecciones, porque sería una baza entre la población negra y acrecentaría su imagen de líder mundial. Tampoco le vendría mal a su colega Blair, el más firme valedor de la intervención. Aclararía que lo suyo en Irak no fue sólo cuestión de intereses económicos.

La Unión Europea, sin embargo, huye de la definición de genocidio porque ni Francia, ni Alemania están dispuestas a intervenir. Así, el enviado especial a la zona (que estuvo un sólo día en Darfur, un territorio tan grande como España) negó la existencia de un genocidio y abogó por presionar a Jartum por la vía diplomática para que desarme a las milicias.

Sin embargo el gobierno no estaría en condiciones de solucionar el conflicto, por más declaraciones y acciones que haga. No acepta fuerzas armadas de otros países en su territorio, como fue el ofrecimiento hecho por la UA, ni el refuerzo de miembros del EPLS en sus filas. Quizás esto obedezca a que, según observadores en la zona, el gobierno no quiere testigos de su alianza con las etnias árabes, relación que se hace cada vez más estrecha, para dominar este extenso territorio. La relación entre las milicias y el gobierno se han estrechado, en lugar de que este último las combata, ya que ésta es la única manera de controlar el territorio.

Bibliografía:

Agreement of Cessation of Hostilities, Government of the Republic of Sudan and the Sudan People's Liberation Movement/Army, 15 Oct 2002. <http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/0/04F81BE8FD3BA893C1256C5C004DAB8B?OpenDocument>

Edith M. Lederer: "Acuerdo entre ONU y Sudán busca crear zonas de seguridad", El Nuevo Herald.com, agosto 14, 2004.

Fabienne Rose Émilie Le Houerou: "Campos de la sed en Sudán. Las organizaciones humanitarias abandonan a los refugiados", en Le Monde Diplomatique, en Rebelión África, traducción: Lucía Vera, 29 de mayo del 2003. <http://www.rebellion.org/africa/030529sudan.htm>

Ibrahim Ali Suleiman: "Sudán ordena a jefes tribales ayudar a desarmar milicia", El Nuevo Herald.com, agosto 13, 2004.

Juan Esteban Ugarriza: "Árabes contra negros en las arenas del atribulado Sudán", periódico El Colombiano.com, sábado 14 de agosto de 2004. <http://www.terra.com.co/actualidad/internacional/02-08-2004/nota183653.html>

Machakos Protocol IGAD "Secretariat on Peace in the Sudan", July 20th, 2002. <http://www.irinnews.org/webspecials/sudan/sudanMachakos.htm>

Marián Hens: "Sudán: la guerra olvidada", Centro de Investigación para la Paz (CIP)/Seminario de Investigación para la Paz (SIP), Informe nº 7, 1997. <http://www.cip.fuhem.es/observatorio/informes/sudan.htm>

Memorandum of Understanding between Sudan and the SPLM/A on Aspects of Structures of Government, Government of the Republic of Sudan and the Sudan People's Liberation Movement/Army, 18th November 2002. <http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/0/BEC9263F8C34B20AC1256C7D004FB4A2?OpenDocument>

Solidaridad.net - cibod : "Sudán y el negocio de la guerra", Junio 2003. <http://www.solidaridad.net/vernoticia.asp?noticia=1495>

Solidaridad.net: "El conflicto de Sudán". <http://www.ub.es/solidaritat/observatori/esp/dossiers/sudan/sudan.htm>

Yolanda Monge: "Vivir y morir en Sudan o la nueva guerra de limpieza étnica. El país de los `jinetes del diablo´", Diario Página 12, Buenos Aires-Argentina, 14 agosto de 2004. <http://pagina12.feedback.net.ar/diario/elmundo/4-39473-2004-08-11.html>

ABC, ES, julio-agosto 2004. www.abc.es

Agencia EFE S.A, julio 2003 a agosto2004. www.efe.es

AGM news, agosto2004. www.agmnews.com

AKN, agosto2004. www.red-akn.net

Prensa Latina, julio-agost2004. www.prensa-latina.org

Yahoo, noticias España, marzo-agosto2004. es.news.yahoo.com